Edición
en lengua española

Legislación

Sumario

I *Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad*

- ★ Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural 1
- ★ Directiva 98/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito 13
- ★ Directiva 98/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se modifica, en lo relativo en particular a las hipotecas, la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito 26
- ★ Directiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se modifican el artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo referente al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, los artículos 2, 5, 6, 7 y 8 y los anexos II y III de la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito y el artículo 2 y el anexo II de la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito 29
- ★ Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas 37

I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DIRECTIVA 98/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 22 de junio de 1998

sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57, su artículo 66 y su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ⁽²⁾,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado ⁽³⁾,

- (1) Considerando que, de conformidad con el artículo 7 A del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada; que es importante adoptar medidas destinadas a continuar la realización del mercado interior;
- (2) Considerando que, de conformidad con el artículo 7 C del Tratado, hay que tener en cuenta las diferencias en el desarrollo de ciertas economías, si bien las excepciones que se establezcan deben tener un carácter temporal y perturbar lo menos posible el funcionamiento del mercado común;
- (3) Considerando que el establecimiento de un mercado del gas natural competitivo constituye un elemento importante de la consecución del mercado interior de la energía;

⁽¹⁾ DO C 65 de 14.3.1992, p. 14 y DO C 123 de 4.5.1994, p. 26.

⁽²⁾ DO C 73 de 15.3.1993, p. 31 y DO C 195 de 18.7.1994, p. 82.

⁽³⁾ Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de noviembre de 1993 (DO C 329 de 6.12.1993, p. 182), Posición común (CE) n° 17/98 del Consejo de 12 de febrero de 1998 (DO C 91 de 23.3.1998, p. 46) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de abril de 1998 (DO C 152 de 18.5.1998). Decisión del Consejo de 11 de mayo de 1998).

(4) Considerando que la Directiva 91/296/CEE del Consejo, de 31 de mayo de 1991, sobre el tránsito de gas natural a través de las grandes redes ⁽⁴⁾ y la Directiva 90/377/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de electricidad ⁽⁵⁾ constituyen una primera fase de la realización del mercado interior del gas natural;

(5) Considerando que actualmente es necesario tomar otras medidas con el objeto de establecer el mercado interior del gas natural;

(6) Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva no afectará a la plena aplicación del Tratado CE, y en particular, de sus disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías en el mercado interior y a las normas de competencia y no afecta a las competencias que el Tratado otorga a la Comisión;

(7) Considerando que el mercado interior del gas natural debe realizarse progresivamente para que la industria eléctrica pueda ajustarse flexible y racionalmente a la nueva situación, y para tener en cuenta la diversidad actual de las estructuras de los mercados en los Estados miembros;

(8) Considerando que el establecimiento del mercado interior en el sector del gas natural debe favorecer la interconexión y la interoperabilidad de las redes, por ejemplo por medio de clases de gas compatibles;

(9) Considerando que se debería establecer un número determinado de normas comunes para la organización y el funcionamiento del sector del gas natural; que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, dichas normas únicamente constituyen un marco de principios generales, cuya aplicación concreta debe, sin embargo, confiarse a los Estados miembros;

⁽⁴⁾ DO L 147 de 12.6.1991, p. 37; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95/49/CE (DO L 233 de 30.9.1995, p. 86).

⁽⁵⁾ DO L 185 de 17.7.1990, p. 16; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.

- bros, que podrán mantener o escoger el régimen más adecuado a su situación particular, en especial respecto a las autorizaciones y a la supervisión de los contratos de suministro;
- (10) Considerando que el suministro exterior de gas natural reviste una importancia particular para la compra de gas natural en Estados miembros muy dependientes de las importaciones;
- (11) Considerando que, por regla general, las empresas del sector de gas natural deben poder actuar sin ser objeto de discriminación;
- (12) Considerando que para garantizar la seguridad de suministro, la protección del consumidor y la protección del medio ambiente, para algunos Estados miembros puede ser necesaria la imposición de obligaciones de servicio público, puesto que, en su opinión, la libre competencia por sí misma no las garantiza;
- (13) Considerando que la planificación a largo plazo es uno de los medios para realizar dichas obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros intenten acceder a la red; que los Estados miembros pueden supervisar contratos de compra garantizada (*take-or-pay*) celebrados para mantenerse al día con la situación de suministro;
- (14) Considerando que el apartado 1 del artículo 90 del Tratado obliga a los Estados miembros a respetar las normas de competencia en relación con las empresas públicas y con empresas a las que se hayan concedido derechos especiales o exclusivos;
- (15) Considerando que el apartado 2 del artículo 90 del Tratado sujeta a las empresas encargadas de servicios de interés económico general a tales normas bajo condiciones concretas; que la ejecución de la presente Directiva tendrá un impacto sobre las actividades de dichas empresas; que, tal como se dispone en el apartado 3 del artículo 3, los Estados miembros no estarán obligados a aplicar el artículo 4 a su infraestructura de distribución con el fin de no obstaculizar el cumplimiento, de hecho o de derecho, de las obligaciones de interés económico general impuestas a las compañías de gas natural;
- (16) Considerando que los Estados miembros, al imponer obligaciones de servicio público a las empresas del sector del gas natural, deberán, por consiguiente, respetar las normas correspondientes del Tratado, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
- (17) Considerando que se deberían fijar criterios y procedimientos básicos con respecto a las autorizaciones que los Estados miembros pueden conceder para la construcción o explotación de las instalaciones pertinentes de su red nacional; que estas disposiciones no deberían afectar a las normas pertinentes de la legislación nacional que somete a la construcción o explotación de las instalaciones pertinentes a un requisito de autorización; que dicho requisito no debería, sin embargo, restringir la competencia entre las empresas del sector;
- (18) Considerando que la Decisión nº 1254/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 1996, por la que se establece un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de energía ⁽¹⁾, contribuye al desarrollo de infraestructuras integradas en el sector del gas natural;
- (19) Considerando que las normas técnicas para la explotación de las redes y de las líneas directas deben ser transparentes y deben garantizar la interoperabilidad de las redes;
- (20) Considerando que deberán fijarse normas básicas por lo que se refiere a las empresas de conducción, de almacenamiento y de gas natural licuado, así como para las empresas de distribución y de suministro;
- (21) Considerando que conviene asimismo que las autoridades competentes puedan acceder a la contabilidad interna de las empresas, respetando la confidencialidad;
- (22) Considerando que la contabilidad de todas las compañías de gas natural integradas deberá tener un alto grado de transparencia; que diferentes actividades deberán llevar su contabilidad por separado, cuando sea necesario para evitar discriminaciones, subvenciones cruzadas y demás distorsiones de la competencia, teniendo en cuenta, según los casos, que la conducción, a efectos de contabilidad, incluye la regasificación; que las entidades jurídicas, como la bolsa o los mercados de futuros, que, al margen de esta actividad comercial no realicen ninguna de las funciones de una empresa de gas natural, no deberán mantener contabilidad por separado; que la contabilidad integrada de producción de hidrocarburos y actividades conexas puede presentarse como parte del requisito de contabilidad respecto a actividades no relacionadas con el gas que exige la presente Directiva; que la información pertinente del apartado 3 del artículo 23 deberá incluir, en caso necesario, información contable sobre los gasoductos previos;
- (23) Considerando que el acceso a la red debería tener un carácter abierto de conformidad con la presente
-
- ⁽¹⁾ DO L 161 de 29.6.1996, p. 147; Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión nº 1047/97/CE (DO L 152 de 11.6.1997, p. 12).

Directiva y deberá conducir a un nivel suficiente y, si procede, comparable de apertura de los mercados de los distintos Estados miembros; que, al mismo tiempo, la apertura de los mercados no debería crear un desequilibrio innecesario en la situación competitiva de las empresas de los distintos Estados miembros;

- (24) Considerando que, debido a la diversidad de las estructuras y a la especificidad de las redes en los Estados miembros, conviene prever varios procedimientos de acceso a la red que se administren de conformidad con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios;
- (25) Considerando que para llegar a un mercado competitivo del gas natural es preciso proporcionar acceso a redes de gasoductos previas; que se requiere un tratamiento separado en lo que respecta al acceso a esas redes de gasoductos previas teniendo en cuenta, en particular, las características económicas, técnicas y operativas especiales de tales redes; que las disposiciones de la presente Directiva no afectarán de ninguna manera a las normas fiscales nacionales;
- (26) Considerando que es preciso regular la autorización, la construcción y la utilización de líneas directas;
- (27) Considerando que procede establecer cláusulas de salvaguardia y procedimientos de solución de conflictos;
- (28) Considerando que hay que evitar todo abuso de posición dominante y todo comportamiento depredatorio;
- (29) Considerando que, debido al riesgo de dificultades particulares de adaptación en determinados Estados miembros, debe preverse la posibilidad de establecer excepciones temporales;
- (30) Considerando que los contratos de compra garantizada (*take-or-pay*) a largo plazo son una realidad de mercado para garantizar el suministro de gas a los Estados miembros; que, en especial, deberían preverse excepciones a determinadas disposiciones de la presente Directiva en caso de que una compañía de gas natural se encuentre o pueda encontrarse en dificultades económicas graves a causa de sus obligaciones de compra garantizada (*take-or-pay*); que estas excepciones no deben socavar el objetivo de la presente Directiva de liberalizar el mercado interior del gas natural; que todo contrato de compra garantizada (*take-or-pay*) iniciado o renovado después de la entrada en vigor de la presente Directiva debe celebrarse con prudencia para no obstaculizar una apertura significativa del mercado; que, por lo tanto, dichas excepciones

deberán limitarse en el tiempo y en su alcance y deberán concederse de una manera transparente, bajo la supervisión de la Comisión;

- (31) Considerando que se necesitan disposiciones específicas para los mercados e inversiones en otras zonas que todavía no han alcanzado una etapa de desarrollo; que las excepciones para tales mercados y zonas deben limitarse en el tiempo y en su alcance; que, en aras de la transparencia y la uniformidad, la Comisión debería tener un papel de importancia en la concesión de esas excepciones;
- (32) Considerando que la presente Directiva constituye otra fase de liberalización; que, aun después de su aplicación, seguirán existiendo ciertos obstáculos al comercio del gas natural entre Estados miembros; que, a la luz de la experiencia adquirida podrán presentarse propuestas a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior del gas natural; que, por tanto, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

La presente Directiva establece normas comunes relativas a la conducción, la distribución, el suministro y el almacenamiento de gas natural. Define las normas relativas a la organización y funcionamiento del sector del gas natural, incluido el gas natural licuado (GNL), al acceso al mercado, al funcionamiento de las redes y a los criterios y procedimientos que deberán aplicarse para otorgar autorizaciones de conducción, distribución, suministro y almacenamiento de gas natural.

Artículo 2

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- 1) «compañía de gas natural»: cualquier persona jurídica o física que realice al menos una de las actividades siguientes: producción, conducción, distribución, suministro, compra o almacenamiento de gas natural, incluido el gas natural licuado, y que lleve a cabo las tareas comerciales, técnicas o de mantenimiento relacionadas con estas funciones, pero sin incluir a los clientes finales;

- 2) «red de gasoductos previa»: todo gasoducto o red de gasoductos explotados o construidos como parte de un centro de producción de petróleo o de gas, o utilizados para transportar gas natural de uno o más de dichos centros a una planta o terminal de transformación o a una terminal final costera de descarga;
- 3) «conducción»: el transporte de gas natural por redes de gasoductos de alta presión distintas de las redes de gasoductos previas para su suministro a los clientes;
- 4) «empresa de conducción»: cualquier persona física o jurídica que realice la actividad de conducción;
- 5) «distribución»: el transporte de gas natural por redes de gasoductos locales o regionales para su suministro a clientes;
- 6) «empresa de distribución»: cualquier persona física o jurídica que realice la actividad de distribución;
- 7) «suministro»: la entrega y/o la venta a clientes de gas natural procesado, incluido el licuado;
- 8) «empresa suministradora»: cualquier persona física o jurídica que realice la función de suministro;
- 9) «instalación de almacenamiento»: una instalación utilizada para el almacenamiento de gas natural de la que sea propietario o de cuya explotación se haga cargo una compañía de gas natural, excluida la parte utilizada para operaciones de producción;
- 10) «empresa de almacenamiento»: la persona física o jurídica que realiza la actividad de almacenamiento;
- 11) «instalación de GNL»: una terminal que se utilice para licuar el gas natural o para descargar, almacenar y regasificar el gas natural licuado;
- 12) «red»: cualesquiera redes de conducción o distribución o instalaciones de GNL de las que sea propietaria o de cuya explotación se haga cargo una compañía de gas natural, incluidas sus instalaciones de servicios auxiliares, así como las de las empresas vinculadas necesarias para dar acceso a la conducción y a la distribución;
- 13) «red interconectada»: el conjunto formado por varias redes conectadas entre sí;
- 14) «línea directa»: un gasoducto para gas natural complementario de la red interconectada;
- 15) «compañía de gas natural integrada»: una empresa integrada vertical u horizontalmente;
- 16) «empresa verticalmente integrada»: una compañía de gas natural que realice al menos dos de las actividades siguientes: producción, conducción, distribución, suministro o almacenamiento de gas natural;
- 17) «empresa horizontalmente integrada»: una empresa que realice al menos una de las actividades siguientes: producción, conducción, distribución, suministro o almacenamiento de gas natural, así como actividades no relacionadas con el gas;
- 18) «empresa vinculada»: las empresas filiales, con arreglo al artículo 41 de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, sobre cuentas consolidadas ⁽¹⁾, o las empresas asociadas, con arreglo al apartado 1 del artículo 33 de dicha Directiva, o las empresas que pertenezcan a los mismos accionistas;
- 19) «usuario de la red»: cualquier persona física o jurídica que abastezca a las redes o que sea abastecida por éstas;
- 20) «clientes»: los clientes al por mayor o clientes finales de gas natural y las compañías de gas natural que compren gas natural;
- 21) «cliente final»: el consumidor que compre gas natural para su propio uso;
- 22) «cliente mayorista»: si los Estados miembros reconocen su existencia, toda persona física o jurídica que compre y venda gas natural y que no realice funciones de conducción o distribución dentro o fuera de la red a la que esté conectado;
- 23) «planificación a largo plazo»: la planificación a largo plazo de la capacidad de suministro y de transporte por parte de las compañías de gas natural para atender la demanda de gas natural de las redes, diversificar las fuentes y garantizar el abastecimiento a los clientes;
- 24) «mercado emergente»: un Estado miembro en el que el primer suministro comercial de su primer contrato de suministro a largo plazo de gas natural se haya efectuado menos de diez años antes;
- 25) «seguridad»: tanto la seguridad en el suministro y abastecimiento como la seguridad técnica.

⁽¹⁾ DO L 193 de 18.7.1983, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.

CAPÍTULO II

NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Artículo 3

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros, basándose en su organización institucional y cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarán por que las compañías de gas natural funcionen con arreglo a los principios de la presente Directiva, con miras a la realización de un mercado competitivo del gas natural, y no ejercerán discriminación entre aquéllas en cuanto a derechos y obligaciones.

2. Los Estados miembros, respetando plenamente las disposiciones pertinentes del Tratado, en particular su artículo 90, podrán imponer a las compañías de gas natural obligaciones de servicio público de interés económico general, que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del abastecimiento, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente. Estas obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables; dichas obligaciones de servicio público, así como su posible revisión, serán publicadas y comunicadas sin demora a la Comisión por los Estados miembros. Como medio de cumplir con las obligaciones de servicio público relativas a la seguridad de abastecimiento, los Estados miembros que así lo deseen podrán establecer una planificación a largo plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de que otras partes deseen acceder a las redes.

3. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar las disposiciones del artículo 4 respecto de la distribución, en la medida en que tal aplicación obstaculizara el cumplimiento, de hecho o de derecho, de las obligaciones impuestas a las compañías de gas natural en el interés económico general, y en que el desarrollo de los intercambios se viese afectado de tal manera que resultara contrario a los intereses de la Comunidad. Los intereses de la Comunidad incluyen, entre otros, la competencia con respecto a los clientes cualificados de conformidad con la presente Directiva y con el artículo 90 del Tratado.

Artículo 4

1. Cuando se requiera una autorización (por ejemplo, licencia, permiso, concesión, acuerdo o aprobación) para la construcción o explotación de instalaciones de gas natural, los Estados miembros o cualquier autoridad competente que ellos designen, otorgarán autorizaciones para construir y/o explotar en su territorio las mencionadas instalaciones y gasoductos y el equipo correspondiente, con arreglo a los apartados 2 a 4. Los Estados miembros o cualquier autoridad competente que éstos designen también podrán otorgar, sobre esa misma base, autorizaciones para el suministro de gas natural y autorizaciones a clientes mayoristas.

2. Los Estados miembros que dispongan de un sistema de autorizaciones establecerán criterios objetivos y no discriminatorios, que deberá cumplir toda empresa que solicite una autorización para construir y/o explotar instalaciones de gas natural o que solicite una autorización para suministrar gas natural. Los criterios y procedimientos para la concesión de autorizaciones, que no deberán ser discriminatorios, serán objeto de publicación.

3. Los Estados miembros velarán por que los motivos de la denegación de una concesión de autorización sean objetivos y no discriminatorios, y se informe de ellos al solicitante. Se comunicarán a la Comisión, a efectos informativos, los motivos de las denegaciones de que se trate. Asimismo, los Estados miembros establecerán un procedimiento que permita al solicitante recurrir contra tales denegaciones.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, cuando se trate del desarrollo de zonas en las que el suministro sea reciente y de la eficacia de la explotación, en general, los Estados miembros podrán denegar nuevas autorizaciones para la construcción y explotación de redes de gasoductos de distribución en una zona determinada, una vez que se hayan construido o se haya propuesto la construcción de dichas redes de gasoductos en la citada zona y cuando no esté saturada la capacidad de transporte existente o propuesta.

Artículo 5

Los Estados miembros velarán por que se elaboren y estén disponibles las normas técnicas que establezcan los requisitos técnicos mínimos de diseño y funcionamiento para la conexión a la red de instalaciones de GNL, instalaciones de almacenamiento, otras redes de conducción o de distribución y gasoductos directos. Dichas normas técnicas deberán garantizar la interoperabilidad de las redes, ser objetivas y no discriminatorias. Se notificarán a la Comisión, con arreglo al artículo 8 de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas ⁽¹⁾.

CAPÍTULO III

CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y GNL

Artículo 6

Los Estados miembros velarán por que las empresas de conducción, de almacenamiento y de GNL actúen con arreglo a las disposiciones de los artículos 7 y 8.

⁽¹⁾ DO L 109 de 26.4.1983, p. 8; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/139/CE (DO L 32 de 10.2.1996, p. 31).

Artículo 7

1. Cada empresa de conducción, de almacenamiento y/o de GNL deberá explotar, mantener y desarrollar, en condiciones económicamente aceptables, instalaciones de conducción, de almacenamiento y/o de GNL seguras, fiables y eficaces, teniendo debidamente en cuenta el medio ambiente.
2. En cualquier caso, las empresas de conducción, almacenamiento y/o de GNL no deberán discriminar entre los usuarios de la red o categorías de usuarios de la red, en particular favoreciendo a sus empresas vinculadas.
3. Cada empresa de conducción, de almacenamiento y/o de GNL proporcionará a cualquier otra empresa de conducción, de almacenamiento y/o de distribución suficiente información para garantizar que el transporte y almacenamiento de gas natural pueda producirse en forma compatible con un funcionamiento seguro y eficaz de la red interconectada.

Artículo 8

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 o de cualquier otra obligación legal de revelar información, las empresas de conducción, de almacenamiento y/o de GNL deberán preservar el carácter confidencial de la información delicada a efectos comerciales de que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad.
2. Las empresas de conducción, con ocasión de las compras o ventas de gas natural efectuadas por ellas o por una empresa vinculada, no deberán hacer uso inadecuado de cualquier información delicada a efectos comerciales, obtenida de terceros en el momento de la concesión o de la negociación del acceso a la red.

CAPÍTULO IV

DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO

Artículo 9

1. Los Estados miembros velarán por que las empresas de distribución procedan con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 11.
2. Los Estados miembros podrán imponer a las empresas distribuidoras o suministradoras la obligación de abastecer a los clientes situados en una zona determinada o pertenecientes a una determinada categoría, o ambas cosas. La tarifa de esos suministros podrá regularse, por ejemplo, para asegurar la igualdad de trato de los clientes de que se trate.

Artículo 10

1. Cada empresa de distribución deberá explotar, mantener y desarrollar en condiciones económicamente aceptables una red segura, fiable y eficaz, teniendo debidamente en cuenta el medio ambiente.
2. En cualquier caso las empresas de distribución no deberán discriminar a los usuarios de la red o a categorías de usuarios de la red, en particular favoreciendo a sus empresas vinculadas.
3. Cada empresa de distribución proporcionará a cualquier otra empresa de distribución, de conducción y/o de almacenamiento suficiente información para garantizar que el transporte de gas pueda realizarse en forma compatible con un funcionamiento seguro y eficaz de la red interconectada.

Artículo 11

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 o de cualquier otra obligación legal de revelar información, las empresas de distribución deberán preservar el carácter confidencial de la información delicada a efectos comerciales de que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad.
2. Las empresas de distribución, con ocasión de las compras o ventas de gas natural efectuadas por ellas o por una empresa vinculada, no deberán hacer uso inadecuado de cualquier información delicada a efectos comerciales, obtenida de terceros en el momento de la concesión o de la negociación del acceso a la red.

CAPÍTULO V

SEPARACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LAS CUENTAS

Artículo 12

Los Estados miembros, o cualquier autoridad competente que designen, incluidas las autoridades competentes para la solución de conflictos a que hacen referencia el apartado 2 del artículo 21 y el apartado 3 del artículo 23, tendrán el derecho de acceder a la contabilidad de las compañías de gas natural, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, cuya consulta resulte necesaria para sus funciones. Los Estados miembros y las autoridades competentes que hayan sido designadas, incluidas las autoridades competentes para la solución de conflictos, deberán preservar el carácter confidencial de la información delicada a efectos comerciales. Los Estados miembros podrán establecer excepciones con respeto al principio de confidencialidad cuando ello sea necesario para que las autoridades competentes lleven a cabo sus funciones.

Artículo 13

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que la contabilidad de las compañías de gas natural se lleve con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del presente artículo.

2. Las compañías de gas natural, cualquiera que sea su régimen de propiedad o su forma jurídica, establecerán, someterán a auditoría y publicarán su contabilidad anual con arreglo a las normas de la legislación nacional sobre contabilidad anual de las sociedades con limitación de la responsabilidad, adoptadas en aplicación de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad ⁽¹⁾.

Las empresas que no estén obligadas legalmente a publicar sus cuentas anuales conservarán una copia de las mismas en su sede central, a disposición del público.

3. Las compañías de gas natural integradas llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas para sus actividades de conducción, distribución y almacenamiento de gas natural y, cuando proceda, cuentas consolidadas para sus actividades no relativas al gas, tal como se les exigirá si dichas actividades fueran realizadas por empresas distintas, a fin de evitar las discriminaciones, las subvenciones cruzadas y el falseamiento de la competencia. Estas cuentas internas incluirán un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias para cada actividad.

Cuando sea de aplicación el artículo 16 y cuando el acceso a la red se efectúe sobre la base de una cuota única tanto para la conducción como para la distribución, podrán combinarse las cuentas correspondientes a la conducción y a la distribución.

4. Las empresas especificarán en su contabilidad interna las reglas de imputación de las partidas del activo y del pasivo y de los gastos y de los ingresos, así como las reglas de amortización, sin perjuicio de las normas contables de aplicación nacional, que observen para establecer las cuentas separadas a que se refiere el apartado 3. Dichas reglas podrán modificarse únicamente en casos excepcionales. Las modificaciones deberán mencionarse y motivarse debidamente.

5. En las cuentas anuales se indicarán, en forma de notas, las operaciones de cierto volumen realizadas con las empresas vinculadas.

⁽¹⁾ DO L 222 de 14.8.1978, p. 11; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/8/CE (DO L 82 de 25.3.1994, p. 33).

CAPÍTULO VI

ACCESO A LA RED

Artículo 14

Para la organización del acceso a la red, los Estados miembros podrán optar por uno de los procedimientos contemplados en los artículos 15 y 16 o por ambos. Dichos procedimientos se regirán por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

Artículo 15

1. Cuando se trate de un acceso negociado, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las empresas de gas natural y los clientes cualificados, que se encuentren dentro o fuera del territorio que abarque la red interconectada, puedan negociar el acceso a ésta para celebrar contratos de suministro entre sí mediante acuerdos comerciales voluntarios. Las partes deberán ser obligadas a negociar de buena fe el acceso a la red.

2. Los contratos de acceso a la red deberán negociarse con las empresas de gas natural que correspondan. Los Estados miembros exigirán a las compañías de gas natural que publiquen las principales condiciones de uso de la red durante el primer año siguiente a la aplicación de la presente Directiva y, posteriormente, una vez al año.

Artículo 16

Los Estados miembros que opten por un procedimiento de acceso regulado tomarán las medidas necesarias para dar a las empresas de gas natural y a los clientes cualificados que se encuentren dentro o fuera del territorio que abarque la red interconectada derecho de acceso a la red, con arreglo a tarifas publicadas y/o demás condiciones y obligaciones para la utilización de dicha red. El derecho de acceso para los clientes cualificados podrá otorgarse permitiéndoles participar en contratos de suministro con empresas competidoras de gas natural que no sean propietarias y/o gestoras de la red o empresas vinculadas.

Artículo 17

1. Las empresas de gas natural podrán denegar el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad o cuando el acceso a la red les impidiera cumplir las obligaciones de servicio público, mencionadas en el apartado 2 del artículo 3, que se les hubiere asignado o debido a dificultades económicas y financieras graves con contratos de compra garantizada (*take-or-pay*) que se refieran a los criterios y procedimientos del artículo 25 y a la alternativa elegida por los Estados miembros con arreglo al apartado 1 de

dicho artículo. Tales denegaciones deberán estar debidamente motivadas.

2. Los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar que las empresas de gas natural que denieguen el acceso a las redes alegando falta de capacidad o de conexión efectúen las mejoras necesarias siempre que hacerlo sea económicamente viable y que un posible cliente esté dispuesto a correr con los gastos que ello suponga. Cuando los Estados miembros apliquen lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4, corresponderá a los propios Estados miembros adoptar las citadas medidas.

Artículo 18

1. Los Estados miembros especificarán los clientes cualificados, entendiéndose como tales a los clientes situados dentro de su territorio que tengan capacidad jurídica para contratar o adquirir gas natural con arreglo a los artículos 15 y 16, sobreentendiéndose que deberán estar incluidos todos los clientes a los que se refiere el apartado 2.

2. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que al menos los siguientes clientes sean nombrados clientes cualificados:

- centrales productoras de electricidad alimentadas con gas, con independencia de su nivel de consumo anual; no obstante, y a fin de salvaguardar el equilibrio de sus respectivos mercados, los Estados miembros podrán introducir un umbral que no podrá ser superior al nivel previsto para otros clientes finales en las condiciones de acceso de los productores tanto de energía como de calor. Estos umbrales se darán a conocer a la Comisión;
- otros clientes finales que consuman más de 25 millones de metros cúbicos de gas al año calculados según el consumo de cada instalación.

3. Los Estados miembros velarán por que la determinación de los clientes cualificados a la que se refiere el apartado 1 dé lugar a una apertura del mercado igual, como mínimo, al 20 % del consumo total anual de gas del mercado nacional del gas.

4. El porcentaje mencionado en el apartado 3 se aumentará a un 28 % del consumo total anual de gas del mercado nacional del gas cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y a un 33 % diez años después de dicha entrada en vigor.

5. En caso de que la definición de clientes cualificados a la que se refiere el apartado 1 dé lugar a una apertura del mercado superior al 30 % del consumo total anual de gas del mercado nacional del gas, el Estado miembro de que se trate podrá modificar la definición de clientes cualificados siempre que se reduzca la apertura del mercado a no menos de un 30 % de dicho consumo. Los Estados miembros modificarán la definición de clientes cualificados de forma equilibrada, sin ocasionar desventajas con-

cretas para determinados tipos o categorías de clientes cualificados y tomando en consideración las estructuras de mercado existentes.

6. Los Estados miembros tomarán las siguientes medidas para garantizar el incremento de la apertura de sus mercados de gas natural durante un período de diez años:

- el umbral establecido en el segundo guión del apartado 2 para los clientes cualificados que no sean las centrales productoras de energía alimentadas con gas se reducirá a 15 millones de metros cúbicos al año calculados según el consumo de cada instalación cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva y a 5 millones de metros cúbicos al año calculados según el consumo de cada instalación diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva;
- el porcentaje mencionado en el apartado 5 se incrementará al 38 % del consumo total anual de gas del mercado nacional del gas cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y al 43 % de dicho consumo diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

7. Con respecto a los mercados emergentes, la apertura gradual al mercado prevista en el presente artículo deberá comenzar a aplicarse a partir de la fecha en que expire la excepción contemplada en el apartado 2 del artículo 26.

8. Las empresas de distribución, en caso de que no hayan sido reconocidas como clientes cualificados con arreglo al apartado 1, tendrán capacidad jurídica para contratar el suministro de gas natural conforme a los artículos 15 y 16 por el volumen de gas natural que consuman sus clientes considerados cualificados y que entren en su red de distribución, con el fin de abastecer a dichos clientes.

9. Los Estados miembros publicarán antes del 31 de enero de cada año los criterios para la determinación de los clientes cualificados a la que se refiere el apartado 1. Esta información, junto con cualquier otra información apropiada para acreditar el cumplimiento de la apertura del mercado con arreglo al presente artículo, se comunicará a la Comisión para su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*. La Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que modifique sus especificaciones si éstas constituyen un obstáculo a la correcta aplicación de la presente Directiva en lo que respecta al buen funcionamiento del mercado interior del gas natural. Si el Estado miembro de que se trate no da curso a esta petición en un plazo de tres meses, se adoptará una decisión definitiva con arreglo al procedimiento I del artículo 2 de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ⁽¹⁾.

(1) DO L 197 de 18.7.1987, p. 33.

Artículo 19

1. Para evitar desequilibrios en la apertura de los mercados del gas, durante el período al que se refiere el artículo 28:

- a) los contratos de suministro de gas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 con un cliente cualificado en la red de otro Estado miembro no podrán prohibirse si el cliente está considerado como cliente cualificado en las dos redes de que se trate;
- b) en los casos en los que las transacciones descritas en la letra a) sean denegadas debido a que el cliente esté cualificado sólo en una de las dos redes, la Comisión, teniendo en cuenta la situación del mercado y el interés común, podrá obligar a la parte denegante a efectuar el suministro de gas solicitado a petición del Estado miembro en el que esté situado el cliente cualificado.

2. En paralelo con el procedimiento y el calendario previstos en el artículo 28, y a más tardar transcurrida la mitad del plazo previsto en dicho artículo, la Comisión examinará la aplicación de la letra b) del apartado 1 del presente artículo según la evolución del mercado y teniendo en cuenta el interés común. A la luz de la experiencia adquirida, la Comisión evaluará esta situación e informará sobre cualquier posible desequilibrio en la apertura de los mercados del gas con respecto a la letra b) del apartado 1.

Artículo 20

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir que:

- las compañías de gas natural establecidas en su territorio suministren dicho producto mediante una línea directa a los clientes a que se refiere el artículo 18 de la presente Directiva;
- dicho cliente cualificado en su territorio reciba abastecimiento de gas mediante una línea directa por compañías de gas natural.

2. Cuando se requiera una autorización (por ejemplo: licencia, permiso, concesión, acuerdo o aprobación) para la construcción o explotación de líneas directas, los Estados miembros o cualquier autoridad competente que ellos designen fijarán los criterios para conceder autorizaciones para la construcción o explotación de dichas líneas en su territorio. Estos criterios deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.

3. Los Estados miembros podrán subordinar la autorización de construir una línea directa bien a una denegación de acceso a una red, basada en el artículo 17, bien a la apertura de un procedimiento de solución de conflictos con arreglo al artículo 21.

Artículo 21

1. Los Estados miembros velarán por que las partes negocien de buena fe el acceso a la red y por que ninguna de ellas abuse de su posición negociadora para impedir el buen término de las negociaciones.

2. Los Estados miembros designarán una autoridad competente, independiente de las partes, para la pronta solución de los conflictos relacionados con las negociaciones de que se trate. Dicha autoridad resolverá, en particular, los conflictos relacionados con las negociaciones y la denegación de acceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva. La autoridad competente presentará sin demora sus conclusiones, de ser posible en un plazo de doce semanas a partir de la presentación de la solicitud de solución. El recurso a esa autoridad se entenderá sin perjuicio del ejercicio del derecho a interponer recurso en virtud del Derecho comunitario.

3. En caso de conflicto transfronterizo, la autoridad competente para la solución de conflictos responsable será la autoridad de solución de conflictos que abarque la red de la empresa de gas natural que deniegue el uso o el acceso a la red. Cuando en litigios transfronterizos más de una autoridad se ocupe de las redes en cuestión, dichas autoridades deberán mantener consultas con vistas a garantizar la correcta aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 22

Los Estados miembros crearán mecanismos adecuados y eficaces para la regulación, el control y la transparencia con el fin de evitar cualquier abuso de posición dominante, en detrimento de los consumidores en particular, y cualquier práctica abusiva. Dichos mecanismos tendrán en cuenta las disposiciones del Tratado y, en particular, de su artículo 86.

Artículo 23

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, dondequiera que estén establecidos, las empresas y clientes de gas natural cuya cualificación se requiera con arreglo al artículo 18 puedan conseguir, de conformidad con el presente artículo, el acceso a las redes de gasoductos previas, así como a los servicios técnicos correspondientes a dicho acceso excepto para las partes de dichas redes y servicios utilizadas en las operaciones de producción locales, situadas en el lugar del yacimiento en que se produzca el gas. Estas medidas se notificarán a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.

2. El acceso contemplado en el apartado 1 se facilitará en la forma que determine el Estado miembro de conformidad con los instrumentos jurídicos pertinentes. Los Estados miembros pondrán en práctica los objetivos de

un acceso justo y abierto para lograr un mercado competitivo del gas natural y evitar posiciones dominantes abusivas, teniendo en cuenta la seguridad y la regularidad del suministro, el potencial existente o fácilmente disponible y la protección del medio ambiente. Se podrán tener en cuenta los elementos siguientes:

- a) la necesidad de denegar el acceso en caso de incompatibilidad de especificaciones técnicas que no puedan salvarse de forma razonable;
- b) la necesidad de evitar dificultades que no puedan salvarse de forma razonable y que pudiesen ir en menoscabo de la eficaz producción, actual y prevista, de hidrocarburos, incluidos los producidos en yacimientos de viabilidad económica marginal;
- c) la necesidad de respetar las necesidades debidamente justificadas del propietario o explotador de la red de gasoductos previa en relación con el transporte y transformación del gas y los intereses de todos los demás usuarios de la red de gasoductos previa o de los servicios correspondientes de transformación o gestión que puedan resultar afectados; y
- d) la necesidad de aplicar sus leyes y procedimientos administrativos, de conformidad con el Derecho comunitario, en la concesión de las autorizaciones para la producción o el desarrollo de fases previas del proceso.

3. Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de acuerdos para la solución de conflictos, así como una autoridad independiente de las partes con acceso a toda la información pertinente, que permitan la rápida solución de conflictos relativos al acceso a redes de gasoductos previas, observando los criterios expuestos en el apartado 2 y el número de las partes que pudiesen intervenir en las negociaciones para el acceso a dichas redes.

4. En caso de litigios transnacionales, se aplicarán los acuerdos para la solución de conflictos del Estado miembro bajo cuya jurisdicción se encuentre la red de gasoductos previa que no permita el acceso. Cuando, en las disputas transnacionales, más de un Estado miembro cubra la red de que se trate, los Estados miembros interesados mantendrán consultas a fin de garantizar que las disposiciones de la presente Directiva se aplican de forma coherente.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24

1. En caso de crisis repentina del mercado de la energía, o en la que esté amenazada la integridad física o la

seguridad de las personas, de aparatos o de instalaciones, o la integridad de la red, los Estados miembros podrán tomar temporalmente las medidas de salvaguardia necesarias.

2. Dichas medidas deberán causar las mínimas perturbaciones posibles en el funcionamiento del mercado interior y no deberán tener un alcance mayor que el estrictamente indispensable para superar las dificultades sobrevenidas.

3. El Estado miembro afectado notificará inmediatamente tales medidas a los demás Estados miembros y a la Comisión, la cual podrá decidir que el Estado miembro de que se trate las modifique o las suprima, en la medida en que falseen la competencia y afecten negativamente a los intercambios de modo incompatible con el interés común.

Artículo 25

1. Si una compañía de gas natural afronta o considera que va a afrontar dificultades económicas y financieras graves a causa de sus compromisos de compra garantizada (*take-or-pay*) adquiridos en virtud de uno o varios contratos de compra de gas, podrá solicitarse al Estado miembro de que se trate, o a la autoridad competente designada, una excepción temporal a lo dispuesto en los artículos 15 o 16. A elección de los Estados miembros, las solicitudes se presentarán caso por caso, bien antes o después de la denegación de acceso a la red. Los Estados miembros también podrán dar a las compañías de gas natural la elección de presentar la solicitud antes o después de la denegación de acceso a la red. Si una empresa de gas natural deniega el acceso, deberá presentar la solicitud a la mayor brevedad. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la información pertinente relativa a la naturaleza y magnitud del problema y a los esfuerzos realizados por la compañía de gas para solucionar el problema.

Si no se dispone de soluciones alternativas razonables el Estado miembro o la autoridad competente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 3, podrán conceder una excepción.

2. El Estado miembro, o la autoridad competente designada, notificará a la Comisión sin pérdida de tiempo cualquier propuesta para conceder dicha excepción, que irá acompañada de toda la información pertinente relativa a la solicitud de la excepción. Esta información podrá remitirse a la Comisión de forma global, de manera que la Comisión pueda pronunciarse con conocimiento de causa. Dentro de las cuatro semanas siguientes a la recepción de esta notificación, la Comisión podrá pedir al Estado miembro, o a la autoridad competente designada de que se trate, que modifique o revoque la decisión de concesión de la excepción. Si el Estado miembro, o la autoridad competente designada de que se trate, no cumple esta petición en el plazo de un período

de cuatro semanas, se adoptará una decisión definitiva de conformidad con el procedimiento I del artículo 2 de la Decisión 87/373/CEE.

La Comisión preservará la confidencialidad de la información delicada desde el punto de vista comercial.

3. Al decidir sobre las excepciones contempladas en el apartado 1, el Estado miembro, o la autoridad competente designada, y la Comisión tendrán en cuenta, en particular, los criterios siguientes:

- a) el objetivo de lograr un mercado competitivo del gas;
- b) la necesidad de cumplir con las obligaciones de servicio público y garantizar la seguridad del abastecimiento;
- c) la posición de la empresa de gas natural en el mercado del gas y la situación real de competencia en dicho mercado;
- d) la gravedad de las dificultades económicas y financieras encontradas por empresas de gas natural, empresas de conducción o clientes cualificados;
- e) las fechas de firma y las condiciones del contrato o contratos de que se trate, incluida la medida en que permiten tener en cuenta la evolución del mercado;
- f) los esfuerzos realizados para encontrar una solución al problema;
- g) la medida en que la empresa, al aceptar los compromisos de compra garantizada (*take-or-pay*) en cuestión, haya podido prever razonablemente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente Directiva, las graves dificultades que probablemente iban a surgir;
- h) el nivel de conexión de la red con otras redes y su grado de interoperabilidad, y
- i) las repercusiones que la concesión de una excepción tendría en la correcta aplicación de la presente Directiva por lo que se refiere al buen funcionamiento del mercado interior del gas natural.

Las decisiones sobre las solicitudes de excepción relativas a los contratos de compra garantizada (*take-or-pay*) celebrados antes de la entrada en vigor de la presente Directiva no deben dar lugar a una situación en la que sea imposible encontrar salidas económicamente viables. Se considerará que no existen graves dificultades cuando las ventas de gas natural no desciendan por debajo de la cantidad mínima de entrega estipulada en un contrato de compra garantizada (*take-or-pay*) de gas o siempre que el contrato pertinente de compra garantizada (*take-or-pay*) de gas pueda adaptarse o que la empresa de gas natural pueda encontrar salidas alternativas.

4. Las compañías de gas natural a las que no se haya concedido una excepción mencionada en el apartado 1 no podrán rechazar, o no podrán seguir rechazando, el acceso a la red a causa de compromisos de compra garantizada (*take-or-pay*) adquiridos en virtud de un contrato de compra de gas. Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del capítulo VI.

5. Toda excepción que se conceda con arreglo a las disposiciones anteriores deberá estar debidamente justificada. La Comisión publicará la decisión en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

6. La Comisión, dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, presentará un informe en el que se examinará la experiencia adquirida en la aplicación del presente artículo, con el fin de permitir que el Parlamento Europeo y el Consejo estudien, a su debido tiempo, la necesidad de efectuar adaptaciones del presente artículo.

Artículo 26

1. Los Estados miembros que no estén directamente conectados a la red interconectada de cualquier otro Estado miembro y que tengan sólo un único proveedor principal externo podrán establecer excepciones al artículo 4, a los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 18 y al artículo 20 de la presente Directiva. Todo proveedor con una cuota de mercado superior al 75 % será considerado proveedor principal. Esta excepción quedará automáticamente sin efecto en el momento en que al menos uno de estos requisitos deje de cumplirse. Cualquier excepción de este tipo se notificará a la Comisión.

2. Todo Estado miembro que reúna los requisitos para ser considerado mercado emergente y que, debido a la aplicación de la presente Directiva, experimentara problemas importantes, no relacionados con los compromisos derivados de los contratos de compra garantizada (*take-or-pay*) a los que se refiere el artículo 25, podrá establecer excepciones al artículo 4, a los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 18 y al artículo 20 de la presente Directiva. Dicha excepción quedará automáticamente sin efecto en el momento en que el Estado miembro deje de reunir los requisitos para ser considerado mercado emergente. Cualquier excepción de este tipo se notificará a la Comisión.

3. Cuando la aplicación de la presente Directiva cause problemas importantes en una zona geográficamente limitada de un Estado miembro, en particular por lo que se refiere al desarrollo de la infraestructura de conducción, y a fin de fomentar las inversiones, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que establezca una excepción temporal al artículo 4, a los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 18 y al artículo 20, con el fin de mejorar la situación en dicha zona.

4. La Comisión podrá conceder la excepción a que se refiere el apartado 3, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- la necesidad de efectuar inversiones de infraestructura que no serían rentables en un mercado competitivo,
- el nivel y las perspectivas de amortización de las inversiones necesarias,
- el tamaño y el grado de desarrollo de la red de gas en la zona de que se trate,
- las perspectivas de futuro del mercado de gas en cuestión,
- las dimensiones y características geográficas de la zona o región en cuestión, y
- los factores socioeconómicos y demográficos.

Sólo se podrán conceder excepciones cuando la zona no cuente con infraestructuras de gas o bien sólo existan desde hace menos de diez años. La excepción temporal no podrá ser de más de diez años a partir del primer suministro de gas en la zona.

5. La Comisión informará a los Estados miembros acerca de estas solicitudes antes de tomar la decisión en virtud de lo dispuesto en el apartado 4, respetando la debida confidencialidad. Dicha decisión, así como las excepciones contempladas en los apartados 1 y 2, se publicarán en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 27

1. Antes de que transcurra un año desde la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los requisitos de armonización que no estén relacionados con las disposiciones de la misma. Si fuere necesario, la Comisión adjuntará a dicho informe las propuestas de armonización necesarias para el funcionamiento eficaz del mercado interior del gas natural.

2. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán sobre dichas propuestas dentro de los dos años posteriores a su presentación.

Artículo 28

La Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe sobre la experiencia adquirida en cuanto al funcionamiento del mercado interior del gas natural y la aplicación de las normas generales mencionadas en el artículo 3, con objeto de que el Parlamento Europeo y el Consejo, a la vista de la experiencia adquirida, puedan estudiar, en su momento, la posibilidad de adoptar disposiciones para continuar mejorando el mercado interior del gas natural, que serían efectivas a los diez años de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Artículo 29

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar dos años después de la fecha indicada en el artículo 30. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a los presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 30

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 31

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 22 de junio de 1998.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Por el Consejo

El Presidente

J. CUNNINGHAM

DIRECTIVA 98/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 22 de junio de 1998

por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 57,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ⁽²⁾,

Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo ⁽³⁾,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado ⁽⁴⁾,

(1) Considerando que los riesgos vinculados a las transacciones con materias primas y sus derivados son actualmente objeto de la Directiva 89/647/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito ⁽⁵⁾; que, no obstante, la Directiva 89/647/CEE no regula con suficiente precisión los riesgos de mercado vinculados a las posiciones en dichos instrumentos; que procede ampliar la definición de «cartera de negociación» de modo que incluya las posiciones en materias primas o derivados sobre materias primas mantenidas con fines de negociación y sujetas, fundamentalmente, a riesgos de mercado; que las entidades deben cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva en lo que respecta a la cobertura de los riesgos sobre materias primas en el conjunto de su actividad; que los graves fraudes cometidos por algunos operadores

de contratos de futuros sobre materias primas constituyen una creciente preocupación para la Comunidad y una amenaza para la imagen e identidad de la actividad de negociación de contratos de futuros; que es deseable que la Comisión estudie la definición de un marco prudencial adecuado para prevenir dichas prácticas fraudulentas en lo sucesivo;

(2) Considerando que la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito ⁽⁶⁾, establece un método normalizado para el cálculo de los requisitos de capital respecto de los riesgos de mercado asumidos por las empresas de inversión y entidades de crédito; que las entidades han desarrollado sus propios sistemas de gestión de riesgos (modelos internos) concebidos para calcular los riesgos de mercado a que se exponen las empresas de inversión y entidades de crédito con mayor exactitud que el método normalizado; que debe alentarse la utilización de métodos de cálculo del riesgo más exactos;

(3) Considerando que la utilización de los citados modelos internos a efectos del cálculo de los requisitos de capital exige mecanismos rigurosos de control interno y estará sujeta al reconocimiento y supervisión de las autoridades competentes; que la constante fiabilidad de los resultados del cálculo mediante modelos internos se comprobará por un procedimiento de control *a posteriori*;

(4) Considerando que procede que las autoridades competentes puedan permitir que los requisitos de márgenes de garantía para los contratos de futuros y las opciones negociables en mercados organizados, así como, de forma transitoria, para los instrumentos derivados compensados de igual naturaleza no negociables en mercados organizados, se utilicen como garantías sustitutivas de los requisitos de capital calculados para dichos instrumentos de conformidad con la presente Directiva, siempre que ello no dé lugar a un requisito de capital inferior al requisito de capital calculado de acuerdo con los demás métodos que estipula la presente Directiva; que la aplicación de este principio no hace necesario que la equivalencia entre dichos requisitos de margen de garantía y los requisitos de

⁽¹⁾ DO C 240 de 6.8.1997, p. 24 y DO C 118 de 17.4.1998, p. 16.

⁽²⁾ DO C 19 de 21.1.1998, p. 9.

⁽³⁾ Dictamen emitido el 7 de octubre de 1997.

⁽⁴⁾ Dictamen del Parlamento Europeo de 18 de diciembre de 1997 (DO C 14 de 19.1.1998), Posición común del Consejo de 9 de marzo de 1998 (DO C 135 de 30.4.1998, p. 7) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de abril de 1998 (DO C 152 de 18.5.1998); Decisión del Consejo de 19 de mayo de 1998.

⁽⁵⁾ DO L 386 de 30.12.1989, p. 14; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la página 26 del presente Diario Oficial).

⁽⁶⁾ DO L 141 de 11.6.1993, p. 1; Directiva modificada por la Directiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la página 29 del presente Diario Oficial).

capital calculados de acuerdo con los demás métodos que estipula la presente Directiva sean verificados constantemente por las entidades que apliquen tal principio;

- (5) Considerando que las normas adoptadas en un contexto internacional más amplio pueden llevar a reducir los requisitos de capital impuestos a las entidades de crédito de terceros países, a fin de alentar el uso de métodos más perfeccionados basados en modelos internos; que las referidas entidades de crédito compiten con las empresas de inversión y entidades de crédito constituidas en los Estados miembros; que sólo una modificación de la Directiva 93/6/CEE puede alentar a las empresas de inversión y entidades de crédito constituidas en los Estados miembros a desarrollar y utilizar modelos internos;
- (6) Considerando que, a efectos del cálculo de los requisitos de capital respecto del riesgo de mercado, las posiciones en oro y derivados del oro deben estar sujetas al mismo régimen que las posiciones en divisas;
- (7) Considerando que la emisión de deuda subordinada no impedirá automáticamente que las acciones de un emisor puedan incluirse en una cartera a la que quepa asignar una ponderación del riesgo específico del 2 %, conforme a lo previsto en el punto 33 del anexo I de la Directiva 93/6/CEE;
- (8) Considerando que la presente Directiva está en consonancia con los trabajos de un foro internacional de supervisores bancarios sobre el tratamiento cautelar del riesgo de mercado y de las posiciones en materias primas y derivados sobre materias primas;
- (9) Considerando que es necesario disponer de un régimen transitorio en materia de capital, con carácter optativo en lo referente a empresas de inversiones y entidades de crédito que negocian materias primas de importancia en forma limitada y que cuentan con una cartera de materias primas diversificada, pese a no poder aún utilizar modelos a efectos del cálculo de los requisitos de capital de riesgo de materias primas, a fin de garantizar una aplicación armoniosa de la presente Directiva;
- (10) Considerando que la presente Directiva es el medio más adecuado para lograr los objetivos perseguidos y no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 93/6/CEE se modificará de la manera siguiente:

1) El artículo 2 quedará modificado como sigue:

a) la letra a) y la frase introductoria y los incisos i) y ii) de la letra b) del punto 6 se sustituirán por el texto siguiente:

«a) las posiciones propias en instrumentos financieros, materias primas y derivados sobre materias primas que la entidad mantenga para revenderlos o adquiera con intención de beneficiarse a corto plazo de las diferencias reales o esperadas entre el precio de adquisición y el de venta, o de otras variaciones de precio o de tipo de interés, y las posiciones en instrumentos financieros, materias primas y derivados sobre materias primas que se deriven de operaciones de intermediación por cuenta propia compensadas, o posiciones para cubrir otros elementos de la cartera de negociación;

b) los riesgos derivados de transacciones pendientes de liquidación, de operaciones incompletas y de instrumentos derivados no negociables en un mercado organizado mencionados en los puntos 1, 2, 3 y 5 del anexo II, los riesgos derivados de pactos de recompra y préstamos de valores y materias primas basados en valores o materias primas de la cartera de negociación mencionados en la letra a) anterior, tal como se describen en el punto 4 del anexo II, y, cuando lo autoricen las autoridades competentes, los riesgos derivados de pactos de recompra inversa y toma de valores y materias primas en préstamo tal como se describen en el mismo punto 4, siempre que, de las condiciones que se indican a continuación, se cumplan ya sea las contempladas en los incisos i), ii), iii) y v) o las previstas en los incisos iv) y v):

i) que los riesgos se valoren diariamente a precios de mercado aplicando los procedimientos del anexo II;

ii) que la garantía aneja se adecue a las variaciones importantes del valor de los valores o materias primas objeto del pacto o de la transacción de que se trate, mediante una regla aceptada por las autoridades competentes;»;

b) los puntos 15 y 16 se sustituirán por el texto siguiente:

«15. Se entenderá por certificado de opción de compra, un valor que, hasta su fecha de expiración o en dicha fecha, confiere al tenedor el derecho de compra sobre un instrumento subyacente a un precio estipulado. La operación podrá liquidarse mediante la entrega del propio instrumento subyacente o en efectivo.

16. Se entenderá por financiación de existencias las posiciones resultantes de la venta a plazo de existencias materiales y de la congelación del coste de financiación hasta la fecha de su venta aplazada.»;
- c) el párrafo primero del punto 17 se sustituirá por el texto siguiente:
- «17. Se entenderá por pacto de recompra y pacto de recompra inversa, un acuerdo en virtud del cual una entidad o su contraparte ceden valores, materias primas o derechos garantizados relativos a la titularidad de valores o materias primas cuya garantía haya sido emitida por un mercado organizado que ostente los derechos sobre los valores o las materias primas y para los cuales el acuerdo no autorice a la entidad a realizar cesiones o pignoraciones de un valor o materia prima determinado con más de una contraparte simultáneamente, comprometiéndose a recomprar dichos valores o materias primas (o valores o materias primas sustitutivos de las mismas características) a un precio estipulado y en una fecha futura y estipulada o por estipular por la parte cedente; esta cesión constituirá un pacto de recompra para la entidad que venda los valores o materias primas y un pacto de recompra inversa para la entidad que los compre.»;
- d) el punto 18 se sustituirá por el texto siguiente:
- «18. Se entenderá por préstamo de valores o materias primas y toma de valores o materias primas en préstamo una transacción por la cual una entidad o su contraparte ceden valores o materias primas a cambio de una garantía adecuada y con la condición de que el prestatario devolverá valores o materias primas equivalentes en una fecha futura o cuando así lo solicite la parte cedente; esta transacción constituirá un préstamo de valores o materias primas para la entidad que ceda los valores o las materias primas y una toma de valores o materias primas en préstamo para la entidad que los reciba.
- La toma de valores o materias primas en préstamo se considerará una transacción interprofesional cuando la contraparte esté sujeta a coordinación prudencial a nivel comunitario o sea una entidad de crédito de la zona A con arreglo a la Directiva 89/647/CEE o una empresa de inversión reconocida de un país tercero o cuando la transacción se haya celebrado con una cámara de compensación reconocida o un mercado organizado.».
- 2) Los incisos i) y ii) del apartado 1 del artículo 4 se sustituirán por el texto siguiente:
- «i) las exigencias de capital sobre sus operaciones de cartera de negociación calculadas con arreglo a los anexos I, II y VI y, cuando proceda, al anexo VIII;
- ii) las exigencias de capital sobre el conjunto de su actividad calculadas con arreglo a los anexos III y VII y, cuando proceda, al anexo VIII;».
- 3) El apartado 2 del artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:
- «2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades que calculen los requisitos de capital sobre su cartera de negociación con arreglo a los anexos I y II y, cuando proceda, al anexo VIII, controlarán y supervisarán sus grandes riesgos según lo dispuesto en la Directiva 92/121/CEE, con las modificaciones establecidas en el anexo VI de la presente Directiva.».
- 4) El apartado 10 y la frase introductoria del apartado 11 del artículo 7 se sustituirán por el texto siguiente:
- «10. Cuando no se ejerza el derecho de renuncia a que se refieren los apartados 7 y 9, y a los efectos del cálculo en base consolidada de los requisitos de capital establecidos en los anexos I y VIII y de los riesgos frente a clientes establecidos en el anexo VI, las autoridades competentes podrán permitir que las posiciones de la cartera de negociación de una entidad se compensen con las posiciones de la cartera de negociación de otra entidad, con arreglo a las normas establecidas en los anexos I, VI y VIII.
- Además, podrán permitir que las posiciones en divisas de una entidad se compensen con las posiciones en divisas de otra entidad con arreglo a las normas establecidas en el anexo III o el anexo VIII. También podrán permitir que las posiciones en materias primas de una entidad se compensen con las posiciones de otra entidad con arreglo a las normas establecidas en el anexo VII o el anexo VIII.
11. Las autoridades competentes podrán permitir asimismo la compensación con la cartera de negociación y con las posiciones en divisas y en materias primas, respectivamente, de empresas situadas en terceros países, siempre que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:».
- 5) El apartado 5 del artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:
- «5. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que les comuniquen inmediatamente todos los casos en que sus contrapartes en pactos de recompra o de recompra inversa o en operaciones de préstamo de valores o de materias primas o de toma de valores o de materias primas en préstamo incumplan sus obligaciones. La Comisión presentará al Consejo un informe sobre estos casos y sobre sus consecuencias para el régimen que se aplica en la presente Directiva a tales pactos y operaciones antes de que transcurran

tres años a partir de la fecha mencionada en el artículo 12. Este informe describirá también la forma en que las entidades cumplen aquéllas de las condiciones i) a v) de la letra b) del punto 6 del artículo 2 que les sean aplicables, especialmente la condición v). Contendrá asimismo información pormenorizada sobre cualquier cambio del volumen relativo de las operaciones tradicionales de préstamo de las entidades y de sus operaciones de préstamo mediante pactos de recompra inversa y operaciones de toma de valores o materias primas en préstamo. Si, basándose en dicho informe y en otros datos, la Comisión concluyera que son necesarias nuevas salvaguardias para evitar abusos, propondrá las medidas pertinentes.».

6) Se insertará el artículo siguiente:

«Artículo 11 bis

Hasta el 31 de diciembre de 2006, los Estados miembros podrán autorizar a sus entidades a utilizar las tasas mínimas diferenciales, de mantenimiento e íntegras que se indican en el siguiente cuadro en lugar de las mencionadas en los puntos 13, 14, 17 y 18 del anexo VII siempre que las entidades, en opinión de sus autoridades competentes:

- i) negocien un volumen significativo de materias primas,
- ii) cuenten con una cartera de materias primas diversificada, y
- iii) no se encuentren aún en situación de utilizar modelos internos a efectos del cálculo de los requisitos de capital respecto del riesgo de materias primas, con arreglo al anexo VIII.

Cuadro

	Metales preciosos (exep-tuado el oro)	Metales comunes	Productos agrícolas (perecederos)	Otros, incluyendo los productos energéticos
Tasa diferencial (%)	1,0	1,2	1,5	1,5
Tasa de mantenimiento (%)	0,3	0,5	0,6	0,6
Tasa íntegra (%)	8	10	12	15

Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la utilización que hagan del presente artículo.».

- 7) Los anexos I, II, III y V quedarán modificados y se añadirán los anexos VII y VIII con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar veinticuatro meses después de su entrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 22 de junio de 1998.

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM

ANEXO

1. El anexo I quedará modificado como sigue:

a) La última frase del punto 4 se sustituirá por el texto siguiente:

«Las autoridades competentes podrán permitir que el capital exigido como cobertura de los contratos de futuros negociables en mercados organizados sea equivalente al margen de garantía exigido en dichos mercados siempre que, a su juicio, responda a una estimación correcta del riesgo inherente a los futuros y que sea por lo menos igual a los requisitos de capital para un contrato de futuros que resultarían de un cálculo realizado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes podrán permitir también que el capital exigido como cobertura de un contrato de instrumentos derivados no negociables en mercados organizados del tipo al que se refiere el presente punto, compensado por una cámara de compensación reconocida por ella, sea igual al margen exigido por la cámara de compensación siempre que, a su juicio, responda a una estimación correcta del riesgo inherente al contrato de instrumentos derivados y que sea por lo menos equivalente a los requisitos de capital para dicho contrato que resultarían de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII.»;

b) el párrafo tercero del punto 5 se sustituirá por el texto siguiente:

«Las autoridades competentes exigirán que se esté cubierto frente a los demás riesgos, aparte del riesgo de delta, inherentes a las opciones. Las autoridades competentes podrán consentir que los requisitos de capital para las opciones emitidas negociadas en un mercado organizado sean iguales al margen de garantía exigido por dicho mercado, siempre que, a su juicio, tal margen responda a una estimación correcta del riesgo inherente a la opción y que sea por lo menos equivalente a los requisitos de capital para una opción resultantes de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes podrán permitir también que los requisitos de capital para una opción no negociable en mercados organizados, compensada por una cámara de compensación reconocida por ellas, sean iguales al margen exigido por la cámara de compensación siempre que, a su juicio, tal margen responda a una estimación correcta del riesgo inherente a la opción y que sea por lo menos equivalente a los requisitos de capital para una opción no negociable en mercados organizados que resultarían de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII. En el caso de opciones adquiridas, tanto negociables como no negociables en mercados organizados, podrán consentir además que los requisitos de capital sean los mismos que para sus instrumentos subyacentes, con la condición de que éstos no excedan del valor de mercado de la opción. Los requisitos sobre las opciones emitidas no negociables en mercados organizados se determinarán en función de su instrumento subyacente.»;

c) el punto 6 se sustituirá por el texto siguiente:

«6. Los certificados de opción de compra vinculados a instrumentos de deuda y acciones tendrán la misma consideración que las opciones, con arreglo a lo previsto para estas últimas en el punto 5.»;

d) el inciso i) del punto 33 se sustituirá por el texto siguiente:

«i) las acciones no serán de las correspondientes a emisores que hayan emitido únicamente instrumentos de deuda negociables a los que corresponda en ese momento un requisito del 8 % con arreglo al cuadro 1 del punto 14 o a los que corresponda un requisito inferior únicamente por el hecho de estar garantizados.»;

2. El anexo II quedará modificado como sigue:

a) el punto 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Cuando se trate de operaciones en que instrumentos de deuda, acciones y materias primas (excluidos los pactos de recompra y los pactos de recompra inversa, así como el préstamo y la toma en préstamo de valores o de materias primas) permanecen sin liquidar después de la fecha de entrega estipulada, la entidad deberá calcular la diferencia de precio a que se halle expuesta. Ésta representa la diferencia entre el precio de liquidación acordado para los instrumentos de deuda, acciones o materias primas de que se trate y su valor corriente de mercado, en caso de que dicha diferencia pueda entrañar pérdidas para la entidad. El cálculo de los requisitos de capital se efectuará multiplicando la citada diferencia por el factor pertinente de la columna A del cuadro que figura en el punto 2.»;

b) los puntos 3.1 y 3.2 se sustituirán por el texto siguiente:

«3.1. Una entidad estará obligada a tener capital de cobertura frente al riesgo de contraparte siempre que:

- i) haya pagado por valores o materias primas antes de haberlos recibido, o bien haya entregado valores o materias primas antes de haber recibido pago por ellos, y
- ii) en el caso de transacciones transfronterizas, haya transcurrido al menos un día desde el momento en que se efectuó tal pago o entrega.

3.2. Los requisitos de capital serán el 8 % del importe de los valores, materias primas o dinero en efectivo que se adeude a la entidad multiplicado por la ponderación del riesgo aplicable a la contraparte correspondiente.»;

c) el título que precede el punto 4.1 y el párrafo primero del punto 4.1 se sustituirán por el siguiente texto:

«Pactos de recompra y de recompra inversa y préstamo y toma en préstamo de valores o de materias primas

4.1. Cuando se trate de pactos de recompra y de préstamo de valores o de materias primas en los que los valores o materias primas cedidos formen parte de la cartera de negociación, la entidad calculará la diferencia entre el valor de mercado de los valores o materias primas y el importe recibido por la entidad o el valor de mercado de la garantía, si dicha diferencia fuere positiva. En el caso de pacto de recompra inversa y de toma en préstamo de valores o de materias primas, la entidad calculará la diferencia entre el importe prestado por la entidad o el valor de mercado de la garantía y el valor de mercado de los valores o materias primas que haya recibido, si dicha diferencia fuere positiva.».

3. El anexo III quedará modificado como sigue:

a) el punto 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Cuando la suma de la posición global neta en divisas de la entidad y su posición neta en oro, calculadas con arreglo al procedimiento establecido a continuación, supere el 2 % de sus fondos propios totales, la entidad multiplicará la suma de su posición neta en divisas y su posición neta en oro por 8 % a fin de calcular los requisitos de fondos propios frente al riesgo de tipo de cambio.

Hasta el 31 de diciembre de 2004, las autoridades competentes podrán asimismo autorizar a las entidades a calcular sus requisitos de fondos propios multiplicando por 8 % el importe en que la suma de la posición global neta en divisas y de la posición neta en oro supere el 2 % de sus fondos propios totales.»;

b) los puntos 3.1 y 3.2 se sustituirán por el texto siguiente:

«3.1. En primer lugar, la entidad calculará la posición abierta neta mantenida por la entidad en cada una de las divisas (incluida la de referencia) y en oro. Para ello, se sumarán los elementos siguientes (de signo positivo o negativo):

- la posición neta de contado (a saber, todos los elementos del activo menos todos los elementos del pasivo, incluidos los intereses devengados aún no vencidos, expresados en la pertinente divisa o, si se trata de oro, la posición neta de contado en oro);
- la posición neta a plazo (es decir, todos los importes pendientes de cobro menos todos los importes que hayan de pagarse, derivados de operaciones a plazo sobre divisas y oro, incluidos los futuros sobre divisas y oro y el principal de las permutas de divisas que no formen parte de la posición de contado);
- las garantías irrevocables (e instrumentos similares), cuando exista la certeza de que se recurrirá a ellas y muchas probabilidades de que sean irrecuperables;
- los futuros gastos o ingresos netos que aún no hayan vencido, pero que ya estén cubiertos en su totalidad (podrán incluirse aquí, si la entidad que debe aportar la información así lo decide, y siempre que se cuente con el consentimiento previo de las autoridades competentes, aquellos futuros gastos o ingresos netos aún no consignados en los registros contables, pero para los que exista ya plena cobertura a través de operaciones a plazo sobre divisas). La entidad deberá atenerse a la opción que haya escogido;
- el equivalente del delta neto (o basado en el delta) del total de la cartera de opciones sobre divisas y oro;
- el valor de mercado de otras opciones (es decir, no sobre divisas ni oro);

- todas las opciones que una entidad haya tomado deliberadamente con el fin de protegerse frente a los efectos adversos del tipo de cambio sobre su ratio de capital podrán omitirse a la hora de calcular las posiciones abiertas netas en divisas. Las posiciones omitidas deberán tener carácter estructural o no ser de negociación y su omisión, así como cualquier variación en las condiciones de la misma, deberán contar con el consentimiento de las autoridades competentes. Siempre que se cumplan las mismas condiciones que se indican más arriba, podrá aplicarse el mismo tratamiento a las posiciones que mantenga una entidad en relación con partidas ya deducidas en el cálculo de los fondos propios.
- 3.2. Las autoridades competentes podrán autorizar a las entidades a utilizar el valor neto actual cuando calculen la posición abierta neta en cada divisa y en oro.»;
- c) la primera frase del punto 4 se sustituirá por el texto siguiente:
- «4. A continuación, las posiciones netas cortas y largas en cada una de las divisas que no sean la de referencia y la posición neta larga o corta en oro se convertirán, aplicando los tipos de contado, a la divisa de referencia.»;
- d) el punto 7 se sustituirá por el texto siguiente:
- «7. En segundo lugar, hasta el 31 de diciembre de 2004, las autoridades competentes podrán permitir que las entidades apliquen un método distinto de los contemplados en los apartados 1 a 6 para los fines del presente anexo. El volumen de fondos propios resultante de dicho método deberá ser suficiente para superar el 2 % de la posición abierta neta calculada con arreglo al anterior apartado 4 y, sobre la base de un análisis de los movimientos del tipo de cambio de todos los períodos sucesivos de diez días hábiles de los últimos tres años, superar las pérdidas probables durante el 99 % del tiempo o más.
- El método alternativo contemplado en el presente apartado sólo podrá utilizarse cuando se cumplan las condiciones siguientes:
- i) la fórmula de cálculo y los coeficientes de correlación habrán de ser fijados por las autoridades competentes, basándose en un análisis de los movimientos del tipo de cambio,
 - ii) las autoridades competentes revisarán los coeficientes de correlación con regularidad a la luz de la evolución de los mercados de divisas.».
4. El anexo V quedará modificado como sigue:
- a) la primera frase del punto 2 se sustituirá por el texto siguiente:
- «No obstante lo dispuesto en el punto 1, las autoridades competentes podrán permitir que las entidades que estén obligadas a cumplir las exigencias de fondos propios establecidas en los anexos I, II, III, IV, VI, VII y VIII se acojan a una definición distinta de fondos propios solamente para el cumplimiento de dichas exigencias.»;
- b) el punto 4 se sustituirá por el texto siguiente:
- «4. Los préstamos subordinados a que se hace referencia en la letra c) del punto 2 no podrán superar el 150 % de los fondos propios básicos destinados a cubrir las exigencias establecidas en los anexos I, II, III, IV, VI, VII y VIII y únicamente podrán aproximarse a dicho importe en aquellas circunstancias específicas que las autoridades competentes consideren aceptables.»;
- c) los puntos 6 y 7 se sustituirán por el texto siguiente:
- «6. Las autoridades competentes podrán permitir que las empresas de inversión rebasen el tope fijado para los préstamos subordinados a que se refiere el punto 4, si lo juzgan oportuno desde la óptica cautelar, y siempre que la suma de dichos préstamos subordinados y de los elementos a que se refiere el punto 5 no supere el 200 % de los fondos propios básicos destinados a cubrir las exigencias establecidas en los anexos I, II, III, IV, VI, VII y VIII, o el 250 % de ese mismo importe en caso de que las empresas de inversión efectúen la deducción del elemento d) del punto 2 al calcular sus fondos propios.
7. Las autoridades competentes podrán permitir que las entidades de crédito rebasen el tope fijado para los préstamos subordinados a que se refiere el punto 4, si lo juzgan oportuno desde la óptica cautelar, y siempre que la suma de dichos préstamos subordinados y de los elementos a que se refiere el punto 5 no supere el 250 % de los fondos propios básicos destinados a cubrir las exigencias establecidas en los anexos I, II, III, VI, VII y VIII.».

5. Se añadirán los anexos siguientes:

«ANEXO VII

RIESGO SOBRE MATERIAS PRIMAS

1. Toda posición en materias primas o derivados sobre materias primas se expresará con arreglo a la unidad de medida estándar. El precio de contado de cada una de las materias primas se expresará en la moneda de referencia.
2. Las posiciones en oro o en derivados sobre oro se considerarán sujetas a un riesgo de tipo de cambio y se tratarán con arreglo a lo previsto en el anexo III o en el anexo VIII, según los casos, a efectos del cálculo del riesgo de mercado.
3. A efectos del presente anexo, las posiciones que sean meramente de financiación de existencias podrán excluirse a la hora de calcular únicamente el riesgo sobre materias primas.
4. Los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio no contemplados en otras disposiciones del presente anexo se incluirán en el cálculo del riesgo general de los instrumentos de deuda negociables y en el del riesgo de tipo de cambio.
5. Cuando la posición corta venza antes que la posición larga, las entidades se protegerán asimismo contra el riesgo de insuficiencia de liquidez, que puede presentarse en algunos mercados.
6. A efectos de lo dispuesto en el punto 19, el importe por el que las posiciones largas (cortas) de una entidad superen a las posiciones cortas (largas) en una misma materia prima y en idénticos contratos de futuros financieros, opciones y certificados de opción de compra constituirá la posición neta de dicha empresa en cada una de las materias primas. Las autoridades competentes permitirán que las posiciones en instrumentos derivados tengan la misma consideración, tal como se establece en los puntos 8, 9 y 10, que las posiciones en la materia prima subyacente.
7. Las autoridades competentes podrán considerar las siguientes posiciones como posiciones en la misma materia prima:
 - posiciones en distintas subcategorías de materias primas cuando puedan entregarse unas por otras,
 - posiciones en materias primas análogas si constituyen sustitutos cercanos y si puede establecerse con claridad una correlación mínima de 0,9 entre movimientos de precios durante un período mínimo de un año.

Instrumentos concretos

8. Los contratos de futuro sobre materias primas y los compromisos de compra y venta de materias primas individuales a plazo se incorporarán al sistema de cálculo como importes nominales expresados en la unidad de medida estándar y se les asignará un vencimiento con referencia a su fecha de expiración. Las autoridades competentes podrán permitir que los requisitos de capital respecto de los contratos de futuro negociados en mercados organizados sean equivalentes al margen de garantía exigido en dichos mercados siempre que, a su juicio, tal margen responda a una estimación correcta del riesgo inherente a los futuros y que sea equivalente por lo menos a los requisitos de capital para el contrato de futuro resultante de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes podrán permitir también que los requisitos de capital para un contrato de instrumentos derivados de materias primas no negociable en mercados organizados del tipo a que se refiere el presente punto, compensado por una cámara de compensación reconocida por ellas, sea igual al margen exigido por la cámara de compensación siempre que, a su juicio, tal margen responda a una estimación correcta del riesgo inherente al contrato de instrumentos derivados y que sea por lo menos equivalente a los requisitos de capital para dicho contrato que resultarían de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII.
9. Las permutas financieras de materias primas en que una parte de la transacción sea un precio fijo y la otra el precio corriente de mercado se incorporarán al sistema de escalas de vencimientos como una serie de posiciones igual al importe nominal del contrato, de manera que cada posición corresponda a un pago de dicha permuta y se consigne en su correspondiente lugar en la escala de vencimientos (cuadro que figura en el punto 13). Las posiciones serán largas si la entidad paga un precio fijo y recibe un precio variable, o cortas si la entidad recibe un precio fijo y paga un precio variable.

A efectos del sistema de escalas de vencimientos, las permutas financieras de materias primas cuyas partes se refieran a materias primas diferentes deberán consignarse en la escala pertinente.

10. A efectos del presente anexo, las opciones sobre materias primas o sobre derivados se considerarán posiciones con un valor equivalente al importe de la materia prima subyacente a que la opción está vinculada multiplicadas por su delta. Se podrán compensar estas últimas posiciones con cualesquiera posiciones simétricas mantenidas en las materias primas subyacentes o los derivados sobre materias primas idénticos. Deberá emplearse el delta del mercado organizado de que se trate, el calculado por las autoridades competentes o, si ninguno de ellos estuviere disponible o en el caso de opciones negociadas en mercados no organizados, el delta calculado por la propia entidad, siempre que las autoridades competentes estimen que el sistema empleado por la entidad es razonable.

No obstante, las autoridades competentes podrán exigir también que las entidades calculen su delta con arreglo al método establecido por dichas autoridades.

Las autoridades competentes exigirán que se esté cubierto frente a los demás riesgos, aparte del riesgo de delta, inherentes a las opciones sobre materias primas. Las autoridades competentes podrán consentir que los requisitos de capital para las opciones sobre materias primas emitidas negociadas en un mercado organizado sean iguales al margen de garantía exigido por dicho mercado, siempre que, a su juicio, tal margen responda a una estimación correcta del riesgo inherente a la opción y que sea por lo menos equivalente a los requisitos de capital para una opción resultantes de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes podrán permitir también que los requisitos de capital para una opción de materias primas no negociable en mercados organizados, compensada por una cámara de compensación reconocida por ellas, sean iguales al margen exigido por la cámara de compensación siempre que, a su juicio, tal margen responda a una estimación correcta del riesgo inherente a la opción y que sea por lo menos equivalente a los requisitos de capital para dicha opción que resultarían de un cálculo efectuado utilizando el método que se indica más adelante en el presente anexo o aplicando el método de modelos internos que define el anexo VIII. Además, en el caso de opciones sobre materias primas compradas, tanto negociadas como no negociadas en mercados organizados, podrán consentir que los requisitos de capital sean los mismos que para las materias primas subyacentes, con la condición de que éstos no excedan del valor de mercado de la opción. Los requisitos sobre las opciones emitidas no negociadas en mercados organizados se determinarán en función de las materias primas subyacentes.

11. Los certificados de opción de compra vinculados a materias primas tendrán la misma consideración que las opciones sobre materias primas, con arreglo a lo previsto para estas últimas en el punto 10.
12. La entidad que ceda las materias primas o los derechos garantizados relativos a la titularidad de las materias primas en un pacto de recompra y la entidad que preste las materias primas en un pacto de préstamo de materias primas incluirán dichas materias primas en el cálculo de sus requisitos de capital con arreglo al presente anexo.

a) *Sistema de escalas de vencimientos*

13. La entidad utilizará para cada materia prima una escala de vencimientos independiente siguiendo el cuadro que figura a continuación. Todas las posiciones en dicha materia prima y todas las posiciones consideradas posiciones en la misma materia prima, conforme al punto 7, serán consignadas en las bandas de vencimientos correspondientes. Las existencias materiales se consignarán en la primera banda de vencimientos.

Banda de vencimientos (1)	Tasa diferencial (en %) (2)
0 ≤ 1 mes	1,50
> 1 ≤ 3 meses	1,50
> 3 ≤ 6 meses	1,50
> 6 ≤ 12 meses	1,50
> 1 ≤ 2 años	1,50
> 2 ≤ 3 años	1,50
más de 3 años	1,50

14. Las autoridades competentes podrán permitir que las posiciones que sean o se consideren conforme al punto 7 posiciones en la misma materia prima se compensen y consignen en la banda de vencimientos correspondiente con valor neto, en el caso de:

— las posiciones en contratos que venzan en la misma fecha, y

- las posiciones en contratos cuyos vencimientos disten menos de diez días entre sí en caso de que los contratos se negocien en mercados que tengan fechas de entrega diarias.
15. A continuación, la entidad efectuará, para cada banda de vencimientos, la suma de las posiciones largas y la de las posiciones cortas. El importe de las posiciones largas (cortas) que tenga una contrapartida, dentro de la misma banda de vencimientos, en las posiciones cortas (largas) constituirá la posición compensada de dicha banda, en tanto que la posición larga o corta residual será la posición no compensada de esa misma banda.
 16. Aquella parte de la posición larga (corta) no compensada de una banda determinada de vencimientos que tenga contrapartida en una posición corta (larga) de otra banda de vencimientos más distante constituirá la posición compensada entre dos bandas de vencimientos. La parte de la posición larga no compensada, o posición corta no compensada, que no tenga tal contrapartida constituirá la posición no compensada.
 17. Los requisitos de capital de la entidad se calcularán sumando:
 - i) el total de las posiciones largas y cortas compensadas, multiplicado por la tasa diferencial correspondiente, según figura en la columna 2 del cuadro que figura en el punto 13, para cada banda de vencimientos, y por el precio de contado de la materia prima de que se trate,
 - ii) la posición compensada entre dos bandas de vencimientos por cada banda de vencimientos a la que se traspase una posición no compensada, multiplicada por 0,6 % (tasa de mantenimiento) y por el precio de contado de la materia prima,
 - iii) las posiciones residuales no compensadas, multiplicadas por 15 % (tasa íntegra) y por el precio de contado de la materia prima.
 18. Los requisitos generales de capital de la entidad correspondientes a riesgo sobre materias primas se calcularán sumando los requisitos de capital calculados para cada materia prima con arreglo a lo dispuesto en el punto 17.

b) *Método simplificado*

19. Los requisitos de capital de la entidad se calcularán sumando:
 - i) el 15 % de la posición neta, larga o corta, en cada materia prima, multiplicado por el precio de contado de la misma,
 - ii) el 3 % de la posición bruta, larga más corta, en cada materia prima, multiplicado por el precio de contado de la misma.
20. Los requisitos generales de capital de la entidad correspondientes a riesgo sobre materias primas se calcularán sumando los requisitos de capital calculados para cada materia prima con arreglo a lo dispuesto en el punto 19.

ANEXO VIII

MODELOS INTERNOS

1. Siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el presente anexo, las autoridades competentes podrán permitir a las entidades que, a la hora de calcular sus requisitos de capital frente a los riesgos de posición, de tipo de cambio o sobre materias primas, utilicen sus propios modelos de gestión de riesgos en lugar de los métodos descritos en los anexos I, III y VII, o en combinación con los mismos. En cada caso, la utilización de modelos estará supeditada al reconocimiento expreso por la autoridad competente a efectos de supervisión del capital.
2. La autoridad competente sólo dará su reconocimiento si está convencida de que el sistema de gestión de riesgos de la entidad es conceptualmente sólido y se aplica con rigor y, en particular, de que se cumplen las condiciones cualitativas siguientes:
 - i) que el modelo interno de cálculo de riesgos esté sólidamente integrado en el proceso cotidiano de gestión de riesgos de la entidad y sirva de base para la notificación de los riesgos asumidos a los altos directivos de la entidad;
 - ii) que la entidad cuente con una unidad de control de riesgos independiente de las unidades de negociación y que rinda cuentas directamente a los altos directivos. La unidad será responsable de la definición y aplicación del sistema de gestión de riesgos de la entidad, y deberán elaborar y analizar informes diarios sobre los resultados del modelo de gestión de riesgos, así como sobre las medidas que deban adoptarse en lo que respecta a los límites de negociación;

- iii) que el consejo de dirección y los altos directivos de la entidad participen activamente en el proceso de control de riesgos y los informes diarios presentados por la unidad de control de riesgos sean revisados por directivos con la suficiente autoridad para imponer una reducción tanto de las posiciones asumidas por operadores individuales como de los riesgos globales asumidos por la entidad;
 - iv) que la entidad cuente con personal suficiente lo bastante preparado para utilizar modelos complejos en los ámbitos de la negociación, el control de riesgos, la auditoría y la administración;
 - v) que la entidad haya establecido procedimientos para supervisar y garantizar el cumplimiento de una serie documentada de normas y controles internos relativos al funcionamiento global del sistema de cálculo de riesgos;
 - vi) que los modelos de la entidad hayan demostrado ser lo bastante exactos a la hora de calcular el riesgo;
 - vii) que la entidad lleve a cabo con frecuencia un riguroso programa de simulaciones de casos extremos y los resultados de estas pruebas sean revisados por los altos directivos y queden reflejados en las políticas que se establezcan y en los límites que se fijen;
 - viii) que dentro de su procedimiento periódico de auditoría interna, la entidad lleve a cabo una revisión independiente del sistema de cálculo de riesgos. Esta revisión abarcará tanto las actividades de las unidades de negociación como las de la unidad independiente de control de riesgos. Al menos una vez al año, la entidad efectuará una revisión de su proceso de gestión global de riesgos. En dicha revisión se tendrán en cuenta:
 - la adecuación de la documentación del sistema y el proceso de gestión de riesgos y la organización de la unidad de control de riesgos,
 - la integración de los cálculos del riesgo de mercado en la gestión cotidiana de riesgos y el rigor del sistema de información a la dirección,
 - el procedimiento empleado por la entidad para autorizar los modelos de valoración del riesgo y los sistemas de evaluación utilizados por los operadores y el personal administrativo,
 - el alcance de los riesgos de mercado integrados en el modelo de cálculo del riesgo y la validación de cualquier cambio significativo en el proceso de cálculo del riesgo,
 - la exactitud y el rigor de los datos sobre posiciones, la exactitud e idoneidad de las hipótesis de volatilidad y correlaciones, y la exactitud de la valoración y de los cálculos de sensibilidad al riesgo,
 - el proceso de verificación empleado por la entidad para evaluar la coherencia, oportunidad y fiabilidad de las fuentes de datos en que se basen los modelos internos, así como la independencia de tales fuentes, y
 - el procedimiento de verificación empleado por la entidad para evaluar el control *a posteriori* efectuado para medir la exactitud del modelo.
3. La entidad supervisará la exactitud y el funcionamiento de su modelo aplicando un programa de control *a posteriori*. Cada día hábil el control *a posteriori* efectuará la comparación entre el cálculo de valor en riesgo de una jornada generado por el modelo de la entidad para las posiciones de la cartera al cierre de la jornada y el cambio en un día del valor de la cartera al término del siguiente día hábil. Las autoridades competentes estudiarán la capacidad de la entidad para llevar a cabo el control *a posteriori* aplicado a los cambios reales y teóricos del valor de la cartera. El control *a posteriori* de los cambios teóricos del valor de la cartera se basará en la comparación entre el valor de la cartera al cierre de la jornada y, suponiendo que las posiciones no cambian, su valor al cierre de la jornada siguiente. Las autoridades competentes exigirán que las entidades adopten las medidas adecuadas para mejorar sus controles *a posteriori* cuando éstos se consideren defectuosos.
4. A efectos del cálculo de los requisitos de capital correspondiente a riesgo específico relacionado con posiciones de deuda y acciones negociadas, las autoridades competentes podrán reconocer la utilización del modelo interno de las entidades si, además de satisfacer las condiciones que se indican más adelante en el presente anexo:
- dicho método explica la variación del precio histórico en la cartera de valores,
 - refleja la concentración por lo que se refiere a volumen y cambios de composición de la cartera de valores,
 - es resistente a ambientes adversos,
 - es validado mediante un control *a posteriori* destinado a estimar si el riesgo específico se refleja correctamente. En caso de que las autoridades competentes permitan que dichos controles *a posteriori* se efectúen tomando por base las carteras de valores subordinadas pertinentes, éstas deberán seleccionarse en forma consecuyente.

5. Las entidades que utilicen modelos internos no reconocidos con arreglo al punto 4 estarán sujetas a requisitos de capital diferenciados para el riesgo específico que se haya calculado con arreglo al anexo I.
6. A efectos de lo previsto en el inciso ii) del punto 10, el resultado del cálculo que efectúe la propia entidad se multiplicará por un factor de 3.
7. El factor de multiplicación se aumentará con un factor adicional comprendido entre 0 y 1, según lo establecido en el siguiente cuadro, en función del número de excesos alcanzados durante los últimos 250 días hábiles, comprobados por el control *a posteriori* de la entidad. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que calculen los excesos de forma coherente sobre la base del control *a posteriori* de los cambios reales o teóricos del valor de la cartera. Por exceso se entenderá el cambio en una jornada del valor de la cartera que rebase el cálculo del correspondiente valor en riesgo de una jornada generado por el modelo de la entidad. A fin de determinar el factor adicional se evaluará el número de excesos trimestralmente por lo menos.

Número de excesos	Factor adicional
menos de 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o más	1,00

En casos concretos y obediendo a circunstancias excepcionales, las autoridades competentes podrán renunciar a exigir que se incremente el factor de multiplicación con el factor adicional con arreglo a lo dispuesto en el cuadro arriba indicado, si la entidad ha demostrado a satisfacción de las autoridades competentes que tal incremento no está justificado y que el modelo es fundamentalmente sólido.

En caso de que un número elevado de excesos indique que el modelo no es suficientemente preciso, las autoridades competentes revocarán la autorización del modelo o bien impondrán las medidas adecuadas para que éste se revise de inmediato.

A fin de que las autoridades competentes puedan comprobar la adecuación del factor adicional de manera permanente, las entidades notificarán sin demora, y en cualquier caso en un plazo de cinco días laborables, a las autoridades competentes los excesos resultantes de su programa de control *a posteriori* diario y que según el cuadro arriba indicado implicaren un incremento del factor adicional.

8. Si el modelo de la entidad es reconocido por las autoridades competentes de conformidad con el punto 4 a efectos del cálculo de los requisitos de capital correspondientes a riesgo específico, la entidad incrementará su requisito de capital, calculado en virtud de los puntos 6, 7 y 10, mediante un recargo del importe de:
 - i) sea la porción de riesgo específico de la medida de valor en riesgo que debería aislarse atendiendo a medidas de supervisión;
 - ii) sea, a elección de la entidad, las medidas de valor en riesgo de carteras de valores secundarias de opciones de deuda y acciones que entrañen riesgo específico.

Las entidades que elijan la opción ii) tendrán que determinar de antemano la estructura de su cartera de valores secundarios y no deberán alterarla sin el consentimiento de las autoridades competentes.

9. Las autoridades competentes podrán dispensar de los requisitos establecidos en virtud del punto 8 para los recargos en caso de que la entidad demuestre que, a tenor de normas internacionales aprobadas, su modelo refleja correctamente asimismo el riesgo de eventos y el riesgo de cobro/impago para sus posiciones de deuda y acciones negociadas.
10. Cada entidad estará sujeta a requisitos de capital equivalentes al mayor de los dos importes siguientes:
 - i) el valor en riesgo del día anterior, calculado con arreglo a los parámetros descritos en el presente anexo,

- ii) una media de las cifras correspondientes al valor en riesgo diario de los sesenta días hábiles precedentes, multiplicada por el factor contemplado en el punto 6 y ajustada en función del factor mencionado en el punto 7.
11. El cálculo del valor en riesgo estará sujeto a las reglas mínimas siguientes:
 - i) cálculo diario como mínimo del valor del riesgo,
 - ii) intervalo de confianza unilateral del 99 %,
 - iii) período de tenencia equivalente a diez días,
 - iv) período previo de observación de al menos un año, salvo cuando un importante aumento de la inestabilidad de los precios justifique un período de observación más breve,
 - v) actualización trimestral de datos.
 12. Las autoridades competentes exigirán que el modelo refleje con exactitud la totalidad de riesgos de precio importantes de las opciones y de las posiciones asimiladas a opciones y que cualquier otro riesgo de esa especie que no refleje el modelo quede cubierto de forma adecuada por fondos propios.
 13. Las autoridades competentes exigirán que el modelo de cálculo de riesgo englobe un número suficiente de factores de riesgo, en función del volumen de actividad de la entidad en los distintos mercados. Como mínimo, deberán respetarse las disposiciones siguientes:
 - i) en lo que respecta al riesgo de tipo de interés, el modelo interno incorporará un conjunto de factores de riesgo que corresponderán a los tipos de interés de cada divisa en que la entidad tenga posiciones en balance o fuera de balance expuestas al riesgo de tipo de interés. La entidad modelará las curvas de rendimientos con arreglo a alguno de los métodos generalmente aceptados. En lo que respecta a las exposiciones importantes a riesgos de tipos de interés en las principales divisas y mercados, la curva de rendimiento debería dividirse en un mínimo de seis segmentos de vencimiento para englobar las variaciones de la volatilidad de los tipos a lo largo de la curva de rendimiento. El sistema de cálculo de riesgos deberá reflejar también el riesgo de movimientos imperfectamente correlacionados entre distintas curvas de rendimiento;
 - ii) en lo referente al riesgo de tipo de cambio, el sistema de cálculo del riesgo incorporará factores de riesgo correspondientes al oro y a las distintas monedas extranjeras en que estén expresadas las posiciones de la entidad;
 - iii) en lo que respecta al riesgo sobre acciones, el sistema de cálculo del riesgo utilizará, como mínimo, un factor de riesgo diferenciado para cada uno de los mercados de acciones en los que la entidad mantenga posiciones importantes;
 - iv) en lo tocante al riesgo sobre materias primas, el sistema de cálculo del riesgo utilizará, como mínimo, un factor de riesgo diferenciado para cada una de las materias primas en las que la entidad mantenga posiciones importantes. El sistema también deberá reflejar el riesgo de una correlación imperfecta de los movimientos entre materias primas semejantes, aunque no idénticas, así como la exposición a variaciones de los precios a plazo resultantes de desajustes entre los vencimientos. Asimismo, se tendrán en cuenta las características del mercado, en particular, las fechas de entrega y el margen de que disponen los operadores para cerrar posiciones.
 14. Las autoridades competentes podrán autorizar a las entidades a utilizar correlaciones empíricas dentro de una misma categoría de riesgo, o entre distintas categorías, si consideran que el sistema utilizado por la entidad para medir dichas correlaciones tiene un sólido fundamento y se aplica con rigor.».
-

DIRECTIVA 98/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 22 de junio de 1998

por la que se modifica, en lo relativo en particular a las hipotecas, la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las frases primera y tercera del apartado 2 de su artículo 57,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,Visto el dictamen del Comité Económico y Social ⁽²⁾,De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado ⁽³⁾,

(1) Considerando que es oportuno dar el mismo trato a los valores garantizados por hipotecas que a los préstamos contemplados en el número 1 de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 y en el apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 89/647/CEE del Consejo ⁽⁴⁾, cuando las autoridades competentes consideren que son equivalentes en cuanto al riesgo de crédito; que el mercado de la titulización está desarrollándose rápidamente; que, por lo tanto, es deseable que la Comisión examine el trato prudencial de los títulos respaldados por activos patrimoniales y presente, en el plazo de un año desde la adopción de la presente Directiva, unas propuestas de adaptación de la legislación actual con el fin de definir un adecuado trato prudencial de dichos títulos;

(2) Considerando que el apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 89/647/CEE establece una excepción, en determinadas condiciones, a lo dispuesto en el número 1 de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 con respecto a cuatro Estados miembros y, en lo

que se refiere a la ponderación aplicable a los activos garantizados por hipotecas sobre oficinas y locales comerciales polivalentes; que dicha excepción expiró el 1 de enero de 1996;

(3) Considerando que, cuando se adoptó la Directiva 89/647/CEE, la Comisión se comprometió a examinar la citada excepción para determinar si, a la vista de las conclusiones de tal examen y de la evolución internacional en este ámbito, y habida cuenta de la necesidad de evitar un falseamiento de la competencia, estaba justificado modificar dicha disposición, y presentar, en su caso, las oportunas propuestas; que los resultados del estudio de la referida disposición, pese a no ser plenamente concluyentes, ponen de manifiesto la inexistencia de diferencias significativas entre el porcentaje de pérdidas registrado en los Estados miembros beneficiarios de la excepción y el registrado en los que no se han beneficiado de ella; que, por consiguiente, dicha excepción puede hacerse extensiva, hasta el 31 de diciembre de 2006, a cuantos Estados miembros lo deseen;

(4) Considerando que los bienes inmuebles hipotecados deben someterse a unos criterios de valoración rigurosos y que deben volver a tasarse periódicamente para adaptarlos a los cambios del mercado de la propiedad inmobiliaria de carácter comercial; que dichos inmuebles deben ser ocupados por su propietario o cedidos en régimen de arrendamiento por éste; que se excluyen de la mencionada disposición los préstamos para promoción inmobiliaria;

(5) Considerando que la presente Directiva es el medio más adecuado para lograr los objetivos perseguidos y no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 89/647/CEE quedará modificada como sigue:

1) En el punto 1 de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 se añadirá el párrafo siguiente:

⁽¹⁾ DO C 114 de 19.4.1996, p. 9.

⁽²⁾ DO C 30 de 30.1.1997, p. 99.

⁽³⁾ Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 1996 (DO C 320 de 28.10.1996, p. 26); Posición común del Consejo de 9 de marzo de 1998 (DO C 135 de 30.4.1998, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de abril de 1998 (DO C 152 de 18.5.1998); Decisión del Consejo de 19 de mayo de 1998.

⁽⁴⁾ DO L 386 de 30.12.1989, p. 14; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/10/CE (DO L 85 de 3.4.1996, p. 17).

«valores garantizados por hipotecas que puedan asimilarse a los préstamos contemplados en el párrafo primero o en el apartado 4 del artículo 11, cuando las autoridades competentes consideren que, habida cuenta del marco jurídico vigente en los distintos Estados miembros, son equivalentes en cuanto al riesgo de crédito. Sin perjuicio de los tipos de valores que puedan incluirse en este punto 1 y cumplir las condiciones correspondientes, los “valores garantizados por hipotecas” podrán incluir los instrumentos contemplados en las letras a) y b) del punto 1 de la sección B del anexo de la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (*). En particular, las autoridades competentes deberán cerciorarse de que:

- i) dichos valores estén total y directamente garantizados por un conjunto de créditos hipotecarios de la categoría especificada en el párrafo primero o en el apartado 4 del artículo 11, que sean perfectamente válidos en el momento de la creación de los valores garantizados por hipotecas;
- ii) un derecho aceptable de máxima prioridad sobre las partidas de activos hipotecados subyacentes esté en posesión, bien directamente de inversores en valores garantizados por hipotecas, bien, por cuenta de éstos, de un administrador fiduciario o un representante delegado, a prorrata de los valores que posean.

(*) DO L 141 de 11.6.1993; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95/26/CE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7).».

- 2) El apartado 4 del artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente:

«4. Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar a sus entidades de crédito a aplicar una ponderación de riesgo del 50 % a los préstamos que estén plena e íntegramente garantizados, a satisfacción suya, por hipotecas sobre oficinas y locales comerciales polivalentes situados en el territorio de aquellos Estados miembros que permitan una ponderación de riesgo del 50 %, con sujeción a las condiciones siguientes:

- i) el 50 % de la ponderación de riesgo se aplicará a la parte del préstamo que no exceda un límite calculado conforme a lo dispuesto en las letras a) o b) siguientes:
 - a) el 50 % del valor venal del inmueble de que se trate.

El valor venal del inmueble será calculado por dos tasadores independientes, que harán sendas tasaciones, independientes entre sí, en el momento en que se haga el préstamo. Éste deberá basarse en la más baja de las dos tasaciones.

El inmueble volverá a ser tasado al menos una vez al año por un único tasador.

Para los préstamos que no superen 1 millón de ecus y el 5 % de los fondos propios de la entidad de crédito, el inmueble volverá a ser tasado al menos una vez cada tres años por un único tasador;

- b) el más bajo de los valores siguientes: el 50 % del valor venal del inmueble o el 60 % del valor del crédito hipotecario, en aquellos Estados miembros que hayan fijado, en sus leyes o reglamentos, unos criterios rigurosos para la tasación del valor de los créditos hipotecarios.

Se entenderá por valor del crédito hipotecario el valor del inmueble determinado por un tasador que realice una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo de la misma, las condiciones del mercado normales y locales, su uso en el momento de la tasación y sus usos alternativos correspondientes. Los elementos especulativos no se podrán tener en cuenta en la tasación del valor del crédito hipotecario. El valor del crédito hipotecario se documentará de manera clara y transparente.

Al menos cada tres años, o si el mercado acusa una baja de más del 10 %, se volverá a evaluar el valor del crédito hipotecario y, en particular, las hipótesis subyacentes relativas al desarrollo del mercado de que se trate.

Tanto en el caso a) como en el caso b), se entenderá por “valor venal” el precio al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la tasación, en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado permitieran disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta;

- ii) la ponderación del riesgo del 100 % se aplicará a la parte del préstamo que supere los límites fijados en el inciso i);
- iii) el inmueble deberá ser ocupado o cedido en régimen de arrendamiento por su propietario.

Lo dispuesto en el párrafo primero no impedirá que las autoridades competentes de un Estado miembro que apliquen una ponderación más elevada en su territorio puedan permitir, en las condiciones definidas más arriba, la aplicación de una ponderación del 50 % a este tipo de préstamos en los territorios de aquellos Estados miembros que permitan una ponderación de los riesgos del 50 %.

Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar a sus entidades de crédito a aplicar una ponderación de riesgo del 50 % a los préstamos pendientes en el 21 de julio de 2000, siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en el presente apartado. En este caso, el inmueble será tasado conforme a los criterios de tasación fijados más arriba, a más tardar en el 21 de julio de 2003.

Para los préstamos concedidos antes del 31 de diciembre de 2006, la ponderación de riesgo del 50 % seguirá aplicándose hasta su vencimiento, cuando la entidad de crédito esté obligada a cumplir las condiciones del contrato.

Hasta el 31 de diciembre de 2006, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar asimismo a sus entidades de crédito a aplicar una ponderación de riesgo del 50 % a la parte de los préstamos garantizada plenamente, a su satisfacción, mediante acciones de sociedades inmobiliarias finlandesas que operen de conformidad con la Ley finlandesa de sociedades inmobiliarias de 1991 o la legislación posterior equivalente, siempre que se cumplan las condiciones del presente apartado.

Los Estados miembros informarán a la Comisión de la forma en que apliquen el presente apartado.».

- 3) El apartado 5 del artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente:

«5. Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 50 % para las operaciones de arrendamiento inmobiliario con opción de compra realizadas antes del 31 de diciembre de 2006, referidas a bienes de utilización profesional situados en el país de la sede social y reguladas por las disposiciones legales que establezcan que el arrendador conserve la propiedad íntegra del objeto arrendado hasta que el arrendatario ejerza su opción de compra. Los Estados miembros informarán a la Comisión de la forma en que apliquen el presente apartado.».

Artículo 2

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar veinticuatro meses después de su entrada en vigor. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten las citadas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros adoptarán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 22 de junio de 1998.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Por el Consejo

El Presidente

J. CUNNINGHAM

DIRECTIVA 98/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 22 de junio de 1998

por la que se modifican el artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo referente al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, los artículos 2, 5, 6, 7 y 8 y los anexos II y III de la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito y el artículo 2 y el anexo II de la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

dichos países siempre que la información que se comunique esté sujeta a garantías adecuadas de secreto profesional;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las frases primera y tercera del apartado 2 de su artículo 57,

(2) Considerando que la Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito⁽⁵⁾ pondera los activos y las partidas de las cuentas de orden en función de su nivel de riesgo de crédito;

Vista la propuesta de la Comisión⁽¹⁾,

(3) Considerando que las iglesias y las comunidades religiosas que tengan carácter de persona jurídica de Derecho público y recauden impuestos en virtud de la legislación que les confiere tal Derecho entrañan un riesgo de crédito similar al de las administraciones regionales o locales; que, por tanto, resulta coherente dar a las autoridades competentes la posibilidad de aplicar a los créditos sobre iglesias o comunidades religiosas el mismo régimen que a los créditos sobre administraciones regionales o locales, en la medida en que dichas iglesias o comunidades religiosas recauden impuestos; que, no obstante, la opción de ponderar al 0 % los créditos sobre administraciones regionales o locales, basada únicamente en el derecho a recaudar impuestos, no se extiende a los créditos sobre iglesias y comunidades religiosas;

Visto el dictamen del Comité Económico y Social⁽²⁾,

(4) Considerando que la Directiva 94/7/CE de la Comisión, de 15 de marzo de 1994, por la que se adapta la Directiva 89/647/CEE del Consejo sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, en lo relativo a la definición técnica de «bancos multilaterales de desarrollo»⁽⁶⁾ incluyó al Fondo Europeo de Inversiones en dicha definición; que este Fondo constituye una estructura nueva y única de cooperación en Europa destinada a contribuir a la consolidación del mercado interior, al fomento de la recuperación económica en Europa y al logro de una mayor cohesión económica y social;

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado⁽³⁾,

(1) Considerando que la Primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio⁽⁴⁾ permite el intercambio de información entre autoridades competentes y otras autoridades u órganos específicos de un Estado miembro o entre Estados miembros; que dicha Directiva permite también la celebración, por parte de los Estados miembros, de acuerdos de cooperación que establezcan el intercambio de información con las autoridades competentes de terceros países; que, por motivos de coherencia, la presente autorización para celebrar acuerdos relativos al intercambio de información con terceros países debería ampliarse a efectos de incluir el intercambio de información con otras autoridades u órganos específicos de

(5) Considerando que, en virtud del punto 7 de la letra d) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE, la fracción de capital suscrito no

(1) DO C 208 de 19.7.1996, p. 8 y DO C 259 de 26.8.1997, p. 11.

(2) DO C 30 de 30.1.1997, p. 13.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 1997 (DO C 132 de 28.4.1997, p. 234), Posición común del Consejo de 9 de marzo de 1998 (DO C 135 de 30.4.1998, p. 32) y Decisión del Parlamento Europeo de 30 de abril de 1998 (DO C 152 de 18.5.1998). Decisión del Consejo de 19 de mayo de 1998.

(4) DO L 322 de 17.12.1977, p. 30; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/13/CE (DO L 66 de 16.3.1996, p. 15).

(5) DO L 386 de 30.12.1989, p. 14; Directiva cuya modificación la constituye la Directiva 98/32/CE (véase la página 26 del presente Diario Oficial).

(6) DO L 89 de 6.4.1994, p. 17.

desembolsada al Fondo Europeo de Inversiones por las entidades de crédito deberá ponderarse al 100 %;

- (6) Considerando que el capital del Fondo Europeo de Inversiones reservado a la suscripción de las entidades financieras está limitado al 30 %, del cual un 20 % se liberará al principio en cuatro desembolsos anuales del 5 % cada uno, y que, por consiguiente, el 80 % quedará sin liberar, manteniéndose como compromiso latente de los miembros del Fondo; que, habida cuenta del objetivo de fomento de la participación de los bancos comerciales establecido por el Consejo Europeo al crearse el Fondo, procede no penalizar esta participación y, por lo tanto, sería más adecuado aplicar a la fracción de capital suscrito no desembolsada una ponderación del 20 %;
- (7) Considerando que el anexo I de la Directiva 89/647/CEE, relativo a la clasificación de las cuentas de orden, asigna a algunas de estas cuentas un riesgo elevado y, por consiguiente, una ponderación del 100 %; que el apartado 4 del artículo 6 de dicha Directiva establece que: «cuando las cuentas de orden lleven una garantía explícita, serán ponderadas como si la operación correspondiente se hubiera realizado con el garante en lugar de con la contraparte real. Cuando el riesgo derivado de operaciones incluidas en la cuenta de orden esté plenamente garantizado, a satisfacción de las autoridades competentes, mediante cualquiera de los activos reconocidos como garantía pignoratícia en el punto 7 de la letra a) y en el punto 11 de la letra b) del apartado 1, se aplicarán ponderaciones del 0 % o del 20 % de acuerdo con la garantía de que se trate»;
- (8) Considerando que la liquidación de instrumentos derivados negociados en mercados no organizados que realizan las cámaras de compensación en cuanto contrapartes centrales desempeña una importante función en determinados Estados miembros; que es conveniente reconocer los beneficios derivados de tal liquidación desde el punto de vista de la reducción del riesgo de crédito y del correspondiente riesgo sistémico en el tratamiento prudencial del riesgo de crédito; que es necesario garantizar plenamente tanto los riesgos presentes como los posibles riesgos futuros resultantes de contratos derivados compensados negociados en mercados no organizados y que no exista peligro de que el riesgo a que se expone la cámara de compensación se acumule hasta superar el valor del mercado de la garantía pignoratícia, con el fin de conceder, con carácter transitorio, a los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados el mismo tratamiento prudencial que el que se concede a los instrumentos derivados negociables en mercados organizados; que las autoridades competentes deberán considerarse satisfechas con el nivel de los márgenes iniciales y de variación

exigidos y con la calidad y el nivel de protección proporcionados por la garantía pignoratícia;

- (9) Considerando que debe tenerse en cuenta, igualmente, el caso en que la garantía sea una garantía real en el sentido de lo contemplado en el punto 1 de la letra c) del apartado 1 del artículo 6 cuando se trate de cuentas de orden que constituyan garantías o garantías de crédito sustitutivas de crédito;
- (10) Considerando que, en virtud de los puntos 2, 4 y 7 de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE, los activos que constituyen créditos sobre las administraciones centrales y los bancos centrales de la zona A o créditos garantizados expresamente por estas entidades y los activos cubiertos mediante garantía pignoratícia consistente en títulos emitidos por las administraciones centrales o por los bancos centrales de la zona A se ponderan al 0 %; que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/647/CEE, los Estados miembros pueden aplicar, en ciertas condiciones, una ponderación del 0 % a los activos que constituyan créditos sobre sus propias administraciones regionales o locales, así como a los créditos sobre terceros y a las cuentas de orden mantenidas por cuenta de terceros que estén garantizados por estas administraciones regionales o locales;
- (11) Considerando que el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 89/647/CEE establece que los Estados miembros pueden aplicar una ponderación del 20 % a los activos asegurados, a satisfacción de las autoridades competentes, por una garantía pignoratícia consistente en títulos emitidos por las administraciones regionales o locales de la zona A; que resulta oportuno considerar las garantías pignoratícias consistentes en títulos emitidos por las administraciones regionales o locales de los Estados miembros como una garantía de éstas, en el sentido de lo contemplado en el apartado 1 del artículo 7, con vistas a permitir a las autoridades competentes aplicar una ponderación del 0 % a los activos y a las cuentas de orden cubiertos por dichas garantías pignoratícias, en las condiciones establecidas en el citado apartado;
- (12) Considerando que el anexo II de la Directiva 89/647/CEE establece el tratamiento de las cuentas de orden, conocidas habitualmente con la denominación de instrumentos derivados negociados en mercados no organizados, que están relacionadas con tipos de interés y tipos de cambio, en el contexto del cálculo de los requisitos de capital de las entidades de crédito;
- (13) Considerando que la letra a) del punto 1 del artículo 2, el punto 2 del artículo 2, la letra b) del punto 3 del artículo 2, el punto 6 del artículo 2 y los puntos 1 y 2 del artículo 3 y el anexo de la presente Directiva están en consonancia con los

trabajos de otro foro internacional de supervisores bancarios en relación con un tratamiento mejor y, en algunos aspectos, más estricto a efectos de supervisión de los riesgos de crédito asociados a los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados, en particular en lo que se refiere a la ampliación de la cobertura obligatoria de capital a los instrumentos de este tipo sobre subyacentes distintos de tipos de interés y tipos de cambio, y a la posibilidad de tener en cuenta los efectos de reducción del riesgo de los acuerdos de compensación contractual reconocidos por las autoridades competentes al calcular los requisitos de capital para el riesgo potencial de crédito futuro asociado a los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados;

- (14) Considerando que, para las entidades de crédito con actividad internacional y los grupos de entidades de crédito internacionales que compiten con las entidades de crédito de la Comunidad, las normas adoptadas a escala internacional se traducirán en una mejora del tratamiento a efectos de supervisión de los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados; que esta mejora dará lugar a una cobertura obligatoria de capital más apropiada teniendo en cuenta los efectos de reducción del riesgo potencial de crédito futuro de los acuerdos de compensación contractual reconocidos a efectos de supervisión;
- (15) Considerando que, para las entidades de crédito comunitarias, una mejora similar del tratamiento a efectos de supervisión de los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados, que incluya la posibilidad de tener en cuenta los efectos de reducción del riesgo potencial de crédito futuro de los acuerdos de compensación contractual reconocidos a efectos de supervisión, únicamente puede lograrse modificando la Directiva 89/647/CEE;
- (16) Considerando que, para garantizar unas condiciones de igualdad entre las entidades de crédito y las empresas de inversión que compiten en la Comunidad, el tratamiento a efectos de supervisión de sus actividades respectivas en el ámbito de los instrumentos derivados negociados en mercados no organizados debe ser coherente y esta coherencia sólo puede alcanzarse adoptando la Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y de las entidades de crédito ⁽¹⁾;
- (17) Considerando que la presente Directiva es el medio más adecuado para lograr los objetivos perseguidos y no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

El apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE se sustituirá por el texto siguiente:

«3. Los Estados miembros sólo podrán concertar acuerdos de cooperación, que prevean intercambios de información, con las autoridades competentes de terceros países o con las autoridades u órganos de estos países, tal como se definen en el apartado 5 y en el apartado 5 bis, si la información comunicada goza de garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las establecidas en el presente artículo. Estos intercambios de información deberán tener por objetivo el cumplimiento de las tareas de supervisión de las autoridades y órganos mencionados.

Cuando la información se origine en otro Estado miembro, no podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hubieren revelado y, cuando proceda, podrá ser revelada únicamente a los efectos para los que dichas autoridades dieron su acuerdo.».

Artículo 2

La Directiva 89/647/CEE quedará modificada como sigue:

- 1) El artículo 2 quedará modificado como sigue:

- a) se añadirá al apartado 1 el guión siguiente:

«— “mercados organizados”: los mercados regulados por las autoridades competentes que:

- i) operen de forma regular,
- ii) se rijan por unas normas, establecidas o aprobadas por las autoridades pertinentes del país de origen del mercado, que determinen las condiciones de funcionamiento y de acceso al mercado y las condiciones que debe cumplir un contrato antes de que pueda negociarse efectivamente en el mercado,
- iii) cuenten con un mecanismo de compensación que exija que los contratos enumerados en el anexo III estén sujetos a límites legales diarios de cobertura que, en opinión de las autoridades competentes, supongan una garantía adecuada.»;

- b) en el apartado 2 se añadirá el párrafo siguiente:

⁽¹⁾ DO L 141 de 11.6.1993, p. 1.

«Las autoridades competentes podrán incluir también, en el concepto de “administración regional” y de “autoridad local”, a las iglesias y las comunidades religiosas que revistan la forma de personas jurídicas de Derecho público, en la medida en que recauden impuestos de conformidad con la legislación que les confiera tal Derecho. No obstante, en este caso no será de aplicación la opción contemplada en el artículo 7.».

2. En el apartado 3 del artículo 5 la primera frase se sustituirá por el texto siguiente:

«3. En el caso de las cuentas de orden a las que se refiere el apartado 3 del artículo 6, el coste potencial de la sustitución de contratos en el supuesto de incumplimiento de la contraparte se calculará mediante la aplicación de cualquiera de los dos métodos descritos en el anexo II.».

3. El artículo 6 quedará modificado como sigue:

- a) en el apartado 2 se añadirá la frase siguiente:

«Se podrá aplicar una ponderación del 20 % a la fracción no desembolsada de capital suscrito en el Fondo Europeo de Inversiones.»;

- b) el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. Los métodos expuestos en el anexo II se aplicarán a las cuentas de orden enumeradas en el anexo III, excepto a:

- los contratos negociados en mercados organizados,
- los contratos negociados en mercados de divisas (distintos de los contratos sobre oro) con un vencimiento inicial, igual o inferior a catorce días naturales.

Hasta el 31 de diciembre de 2006 las autoridades competentes de los Estados miembros podrán eximir de aplicar los métodos descritos en el anexo II a los contratos de instrumentos derivados negociados en mercados no organizados sujetos a compensación por parte de una cámara de compensación cuando esta última actúe como contraparte legal y todos los participantes cubran íntegramente a diario el riesgo que representen para la cámara de compensación mediante una cobertura que la proteja tanto del riesgo presente como del posible riesgo futuro. Las autoridades competentes deberán comprobar que la garantía pignoraticia prestada proporciona el mismo grado de protección que las garantías pignoraticias a que se refiere el punto 7 de la letra a) del

apartado 1 y de que no existe el peligro de que el riesgo a que se expone la cámara de compensación se acumule hasta superar el valor de mercado de las garantías recibidas. Los Estados miembros informarán a la Comisión del uso que hagan de esta opción.»;

- c) en el apartado 4 se añadirá el párrafo siguiente:

«Los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 50 % a las cuentas de orden que sean garantías o garantías de crédito sustitutivas de crédito y que estén cubiertas íntegramente, a satisfacción de las autoridades competentes, por hipotecas que cumplan las condiciones del punto 1 de la letra c) del apartado 1, a condición de que el garante disfrute de un derecho directo sobre esta garantía.».

4. El artículo 7 quedará modificado como sigue:

- a) en el apartado 1 se añadirá el texto siguiente después de las palabras «autoridades locales»:

«o asegurados, a satisfacción de las autoridades competentes correspondientes, por una garantía pignoraticia consistente en títulos emitidos por dichas administraciones regionales o autoridades locales.»;

- b) en el apartado 2 se añadirá el texto siguiente después de las palabras «estas últimas»:

«incluidas las garantías pignoraticias consistentes en títulos.».

5. El apartado 1 del artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7, los Estados miembros podrán aplicar una ponderación del 20 % a los activos asegurados, a satisfacción de las autoridades competentes correspondientes, mediante una garantía pignoraticia consistente en títulos emitidos por las administraciones regionales o las autoridades locales de países de la zona A, mediante depósitos domiciliados en entidades de crédito de la zona A distintas de la entidad prestamista o mediante certificados de depósito o instrumentos similares emitidos por dichas entidades de crédito.».

6. Los anexos II y III se modificarán o sustituirán de conformidad con las partes A y B del anexo de la presente Directiva.

Artículo 3

La Directiva 93/6/CEE quedará modificada como sigue:

1. El punto 10 del artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«10) Por “instrumentos derivados negociados en mercados no organizados” se entenderá las cuentas de orden a las que, de conformidad con el párrafo primero del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE, deban aplicarse los métodos descritos en el anexo II de dicha Directiva.».

2) El punto 5 del anexo II se sustituirá por el texto siguiente:

«5. Las entidades aplicarán el anexo II de la Directiva 89/647/CEE a fin de calcular los requisitos de capital para sus instrumentos derivados negociados en mercado no organizados. Las ponderaciones de riesgo que habrán de aplicarse a las contrapartes correspondientes se determinarán de conformidad con el punto 9 del artículo 2 de la presente Directiva.

Hasta el 31 de diciembre de 2006 las autoridades competentes de los Estados miembros podrán no aplicar los métodos descritos en el anexo II a los contratos relativos a instrumentos derivados negociados en mercados no organizados sujetos a compensación por parte de una cámara de compensación cuando esta última actúe como contraparte legal y todos los participantes cubran íntegramente a diario el riesgo que representen para la cámara de compensación mediante una cobertura que la proteja tanto del riesgo presente como del posible riesgo futuro. Las autoridades competentes deberán comprobar que la garantía pignoratícia prestada proporciona el mismo grado de protección que las garantías pignoratícias a que se refiere el punto 7 de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE y que no existe el peligro de que el riesgo a que se expone la cámara de compensación se acumule hasta superar el valor de mercado de las garantías recibidas. Los Estados miembros informarán a la Comisión del uso que hagan de esta opción.».

Artículo 4

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar veinticuatro meses después de la fecha de su entrada en vigor. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 5

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 22 de junio de 1998.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Por el Consejo

El Presidente

J. CUNNINGHAM

ANEXO

A. El anexo II de la Directiva 89/647/CEE quedará modificado como sigue:

1) El título se sustituirá por el siguiente:

«ANEXO II

TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS DE ORDEN».

2) El punto 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Elección del método

Siempre y cuando lo consientan las autoridades competentes, las entidades de crédito podrán elegir uno de los métodos que a continuación se indican para evaluar los riesgos de crédito derivados de los contratos que se enumeran en los puntos 1 y 2 del anexo III. Las entidades de crédito que tengan que cumplir con el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 93/6/CEE deberán utilizar el método 1 expuesto más abajo. Para evaluar los riesgos de crédito derivados de los contratos que se enumeran en el punto 3 del anexo III, todas las entidades de crédito deberán utilizar el método 1 expuesto más abajo.».

3) El cuadro 1 del punto 2 se sustituirá por el cuadro siguiente:

«CUADRO 1 (a) (b)

Vencimiento residual (c)	Contratos sobre tipos de interés	Contratos sobre tipos de cambio y oro	Contratos sobre acciones	Contratos sobre metales preciosos, excepto el oro	Contratos sobre productos básicos, salvo los metales preciosos
Un año o menos	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
De uno a cinco años	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Más de cinco años	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

(a) Los contratos no comprendidos en ninguna de las cinco categorías indicadas en este cuadro deberán tratarse como contratos sobre productos básicos, salvo los metales preciosos.

(b) En el caso de los contratos con múltiples intercambios del principal, los porcentajes habrán de multiplicarse por el número de pagos que aún deban realizarse conforme a lo estipulado en el contrato.

(c) En el caso de los contratos estructurados para cubrir riesgos pendientes conforme a unas fechas de pago especificadas, y cuyas condiciones se vuelvan a fijar de forma que el valor de mercado del contrato sea nulo en esas fechas especificadas, el vencimiento residual sería igual al período restante hasta la próxima fecha nuevamente fijada. En cuanto a los contratos sobre tipos de interés que satisfagan estos criterios y tengan un vencimiento residual superior a un año, el porcentaje no será inferior al 0,5 %.

A efectos del cálculo del posible riesgo futuro con arreglo a la fase b), las autoridades competentes podrán permitir que las entidades de crédito apliquen hasta el 31 de diciembre de 2006 los porcentajes siguientes en lugar de los que figuran en el cuadro 1, siempre que la entidad haga uso de la opción mencionada en el artículo 11 bis de la Directiva 93/6/CEE para los contratos a los que se refieren las letras b) y c) del punto 3 del anexo II:

Cuadro 1 bis

Vencimiento residual	Metales preciosos (excepto el oro)	Metales corrientes	Productos agrícolas ("perecederos")	Otros, con inclusión de los productos energéticos
Un año o menos	2 %	2,5 %	3 %	4 %
De uno a cinco años	5 %	4 %	5 %	6 %
Más de cinco años	7,5 %	8 %	9 %	10 %».

- 4) El encabezamiento de la tercera columna del cuadro 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«Contratos sobre tipos de cambio y oro».

- 5) Al final del punto 2 se insertará el párrafo siguiente:

«Para los métodos 1 y 2, las autoridades competentes deberán garantizar que el importe teórico que deba tomarse en cuenta constituya una medida adecuada del riesgo inherente al contrato. Cuando, por ejemplo, el contrato prevea una multiplicación de los flujos de tesorería, el importe teórico habrá de ajustarse a fin de tener en cuenta los efectos de la multiplicación sobre la estructura de riesgos del contrato.».

- 6) En la letra b) del punto 3 se insertará el párrafo siguiente:

«Las autoridades competentes pueden considerar que tienen efectos de reducción del riesgo los acuerdos de compensación contractual relativos a contratos de tipo de cambio con un vencimiento inicial igual o inferior a catorce días naturales, a opciones emitidas o a cuentas de orden similares, a los que no es aplicable el anexo debido a que implican un riesgo de crédito despreciable o nulo. Si, en función del valor de mercado positivo o negativo de estos contratos, su inclusión en otro acuerdo de compensación puede dar lugar a un aumento o disminución de los requisitos de capital, las autoridades competentes deberán obligar a las entidades de crédito a aplicar un tratamiento coherente.».

7. En el inciso ii) de la letra c) del punto 3, el primer párrafo, la frase introductoria y el primer guión del segundo párrafo se sustituirán por el texto siguiente:

«ii) Otros acuerdos de compensación

Al aplicar el método 1:

En la fase a), el coste actual de sustitución de los contratos incluidos en un acuerdo de compensación podrá obtenerse teniendo en cuenta el hipotético coste neto de sustitución que resulte del acuerdo; en caso de que la compensación lleve a una obligación neta para la entidad de crédito que calcula el coste neto de sustitución, al coste actual de sustitución se le atribuirá un valor cero.

En la fase b), para todos los demás contratos incluidos en un acuerdo de compensación bilateral, el riesgo potencial de crédito futuro podrá reducirse mediante la ecuación siguiente:

$$PCE_{red.} = 0,4 * PCE_{bruto} + 0,6 * NGR * PCE_{bruto}$$

siendo:

— $PCE_{red.}$ = riesgo potencial reducido de crédito futuro correspondiente a todos los contratos con una contraparte determinada incluidos en un acuerdo de compensación bilateral válido jurídicamente

— PCE_{bruto} = suma de los riesgos potenciales de crédito futuro correspondientes a todos los contratos con una contraparte determinada incluidos en un acuerdo de compensación bilateral válido jurídicamente, que se calculan multiplicando los importes teóricos del principal por los porcentajes que figuran en el cuadro 1

— NGR = “coeficiente neto/bruto”, esto es, a discreción de las autoridades de supervisión:

i) cálculo separado: cociente entre el coste neto de sustitución de todos los contratos incluidos en un acuerdo de compensación bilateral válido jurídicamente con una contraparte determinada (numerador) y el coste bruto de sustitución de los contratos incluidos en un acuerdo de compensación bilateral válido jurídicamente con dicha contraparte (denominador), o

ii) cálculo agregado: cociente entre la suma de los costes netos de sustitución calculados bilateralmente para todas las contrapartes teniendo en cuenta los contratos incluidos en acuerdos de compensación válidos jurídicamente (numerador) y los costes brutos de sustitución de todos los contratos incluidos en acuerdos de compensación válidos jurídicamente (denominador).

Si los Estados miembros permiten a las entidades de crédito la elección del método, el método elegido deberá emplearse de forma coherente.

Para el cálculo del riesgo potencial de crédito futuro mediante la fórmula anterior, los contratos perfectamente congruentes incluidos en el acuerdo de compensación pueden considerarse un único contrato con un principal notional equivalente a los ingresos netos. Los contratos perfectamente congruentes son contratos sobre tipos de cambio a plazo o contratos similares en los que el principal notional es equivalente a los flujos de tesorería, siempre que éstos sean exigibles en la misma fecha de valor y total o parcialmente en la misma moneda.

Para aplicar el método 2, en la fase a):

- los contratos perfectamente congruentes incluidos en el acuerdo de compensación pueden considerarse un único contrato con un principal nocional equivalente a los ingresos netos; los importes del principal nocional se multiplican por los porcentajes que figuran en el cuadro 2.».

B. El anexo III de la Directiva 89/647/CEE se sustituirá por el texto siguiente:

«ANEXO III

TIPOS DE CUENTAS DE ORDEN

1. Contratos sobre tipos de interés:
 - a) *swaps* sobre tipos de interés en una sola divisa,
 - b) *swaps* sobre tipos de interés variable,
 - c) acuerdos sobre tipos de interés futuros,
 - c) futuros sobre tipos de interés,
 - d) opciones adquiridas sobre tipos de interés,
 - e) otros contratos de naturaleza análoga.
 2. Contratos sobre tipos de cambio y contratos sobre oro:
 - a) *swaps* sobre tipos de interés en diversas divisas,
 - b) operaciones a plazo sobre divisas,
 - c) futuros sobre divisas,
 - d) opciones adquiridas sobre divisas,
 - e) otros contratos de naturaleza análoga,
 - f) contratos sobre oro de naturaleza análoga a los enumerados en las letras a) a e).
 3. Contratos de naturaleza análoga a los mencionados en las letras a) a e) del punto 1 y en las letras a) a d) del punto 2 relativos a otros índices o instrumentos de referencia sobre:
 - a) acciones,
 - b) metales preciosos, excepto el oro,
 - c) productos básicos, salvo los metales preciosos,
 - d) otros contratos de naturaleza análoga.».
-

DIRECTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 22 de junio de 1998

por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

mayor transparencia posible de las iniciativas nacionales destinadas al establecimiento de normas o reglamentos técnicos;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 100 A, 213 y 43,

(4) Considerando que los obstáculos comerciales que se derivan de las reglamentaciones técnicas relativas a los productos sólo pueden admitirse si son necesarios para satisfacer exigencias imperativas y persiguen un fin de interés general del cual constituyen la garantía esencial;

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,Visto el dictamen del Comité Económico y Social ⁽²⁾,

(5) Considerando que es indispensable que la Comisión disponga de las informaciones necesarias antes de la adopción de disposiciones técnicas; que los Estados miembros que, en virtud del artículo 5 del Tratado, están obligados a facilitarle el cumplimiento de su misión, deben, por lo tanto, notificarle sus proyectos en materia de reglamentaciones técnicas;

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado ⁽³⁾,(1) Considerando que la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas ⁽⁴⁾ ha sido modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial; que conviene, en aras de una mayor claridad y racionalidad, proceder a la codificación de dicha Directiva;

(6) Considerando que todos los Estados miembros deben, igualmente, estar informados de las reglamentaciones técnicas previstas por uno de ellos;

(2) Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada; que, en consecuencia, la prohibición de las restricciones cuantitativas, así como de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas en los intercambios de mercancías es uno de los principios básicos de la Comunidad;

(7) Considerando que el mercado interior tiene por objeto garantizar un entorno favorable para la competitividad de las empresas; que, para aprovechar mejor las ventajas de este mercado, es necesario que las empresas estén mejor informadas; que procede, por consiguiente, establecer los mecanismos necesarios para que los operadores económicos puedan dar a conocer su apreciación sobre la repercusión de las reglamentaciones técnicas nacionales proyectadas por otros Estados miembros mediante la publicación periódica de los títulos de los proyectos notificados y de las disposiciones relativas a la confidencialidad de estos proyectos;

(3) Considerando que, con vistas al buen funcionamiento del mercado interior, conviene garantizar la

(8) Considerando que, en aras de la seguridad jurídica, conviene que los Estados miembros hagan público que un reglamento técnico nacional ha sido adoptado con arreglo a las formalidades de la presente Directiva;

⁽¹⁾ DO C 78 de 12.3.1997, p. 4.⁽²⁾ DO C 133 de 28.4.1997, p. 5.⁽³⁾ Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 1997 (DO C 304 de 6.10.1997, p. 79); Posición común del Consejo de 23 de febrero de 1998 (DO C 110 de 8.4.1998, p. 1); Decisión del Parlamento Europeo de 30 de abril de 1998 (DO C 152 de 18.5.1998) y Decisión del Consejo de 22 de mayo de 1998.⁽⁴⁾ DO L 109 de 26.4.1983, p. 8; Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/139/CE de la Comisión (DO L 32 de 10.2.1996, p. 31).

(9) Considerando que, por lo que respecta a las reglamentaciones técnicas relativas a los productos, las medidas destinadas a garantizar el buen funcionamiento del mercado o a proseguir con su fortalecimiento implican, en particular, una mayor transparencia de las intenciones nacionales así como una ampliación de los motivos y las condiciones de apreciación del posible efecto de las reglamentaciones en proyecto sobre el mercado;

- (10) Considerando que, en esta perspectiva, procede apreciar globalmente las prescripciones impuestas para un producto y tener en cuenta la evolución de las prácticas nacionales de reglamentación de productos;
- (11) Considerando que los requisitos que no consisten en especificaciones técnicas que se refieren al ciclo de vida de un producto tras su comercialización pueden afectar a la libre circulación de este último o crear obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior;
- (12) Considerando que es necesario aclarar la noción de reglamento técnico *de facto*; que, en particular, las disposiciones por las que la autoridad pública se refiere a especificaciones técnicas u otros requisitos o incita a su observancia, así como las disposiciones sobre productos a las que las autoridades públicas estén asociadas, por razones de interés público, tienen por efecto conferir en relación con dichos requisitos o especificaciones un valor más vinculante que el que tendrían normalmente dado su origen privado;
- (13) Considerando que la Comisión y los Estados miembros deben poder disponer, además, del plazo necesario para proponer una modificación de la medida prevista, con el fin de eliminar o de reducir los obstáculos que de ella puedan derivarse para la libre circulación de mercancías;
- (14) Considerando que el Estado miembro de que se trate tiene en cuenta estas propuestas de modificación en la elaboración del texto definitivo de la medida prevista;
- (15) Considerando que el mercado interior implica, en particular en caso de que sea imposible aplicar el principio de reconocimiento mutuo por los Estados miembros, que la Comisión decida o proponga la adopción de actos comunitarios vinculantes; que se ha establecido una situación temporal específica para evitar que la adopción de medidas nacionales comprometa la adopción de actos comunitarios vinculantes en el mismo ámbito por el Consejo o por la Comisión;
- (16) Considerando que el Estado miembro en cuestión debe, en virtud de las obligaciones generales del artículo 5 del Tratado, aplazar la aplicación de la medida prevista durante un plazo lo suficientemente largo como para permitir, ya sea el examen en común de las modificaciones propuestas, o la elaboración de la propuesta de un acto vinculante del Consejo o de la adopción de un acto vinculante de la Comisión; que los plazos previstos en el Acuerdo de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 28 de mayo de 1969, referente al *statu quo* y a la información de la Comisión ⁽¹⁾, modificado por el Acuerdo de 5 de marzo de 1973 ⁽²⁾, se han revelado insuficientes en los casos citados y que, por lo tanto, deben establecerse plazos más largos;
- (17) Considerando que el procedimiento del *statu quo* y de información de la Comisión contemplado en el Acuerdo de 28 de mayo de 1969 sigue siendo aplicable a los productos sujetos a dicho procedimiento que no estén regulados por la presente Directiva;
- (18) Considerando que, con el objetivo de facilitar la adopción por el Consejo de medidas comunitarias, es conveniente que los Estados miembros se abstengan de aprobar un reglamento técnico cuando el Consejo haya adoptado una Posición común sobre una propuesta de la Comisión relativa a la misma materia;
- (19) Considerando que, en la realidad, las normas técnicas nacionales pueden producir en la libre circulación de mercancías los mismos efectos que las reglamentaciones técnicas;
- (20) Considerando que, por lo tanto, sería necesario garantizar la información de la Comisión sobre los proyectos de normas, en condiciones análogas a las existentes para las reglamentaciones técnicas; que, en virtud del artículo 213 del Tratado, la Comisión, para el cumplimiento de las funciones que se le confían, puede recoger todo tipo de información y proceder a todas las comprobaciones necesarias dentro de los límites y condiciones fijados por el Consejo de conformidad con las disposiciones del Tratado;
- (21) Considerando que es igualmente necesario que los Estados miembros y los organismos de normalización estén informados de las normas previstas por los organismos de normalización de los otros Estados miembros;
- (22) Considerando que la necesidad de una notificación sistemática sólo existe en efecto para los proyectos de normalización nuevos, y sólo en los casos en que dichos proyectos emprendidos a nivel nacional puedan dar lugar a diferencias en las normas nacionales y, por consiguiente, perturbar el funcionamiento del mercado; que toda notificación o comunicación ulterior relativa a la evolución de los trabajos nacionales debe depender del interés por estos trabajos expresado por aquellos a los que este nuevo proyecto haya sido comunicado previamente;
- (23) Considerando que la Comisión debe, no obstante, tener la posibilidad de pedir la comunicación parcial o total de los programas nacionales de normalización a fin de poder proceder al examen de la evolución de la normalización en sectores económicos concretos;

(1) DO C 76 de 17.6.1969, p. 9.

(2) DO C 9 de 15.3.1973, p. 3.

- (24) Considerando que el sistema europeo de normalización debe estar organizado por y para las partes interesadas y estar basado en la coherencia, la transparencia, la apertura, el consenso, la independencia respecto de los intereses particulares, la eficacia y el sistema de toma de decisiones basado en la representación nacional;
- (25) Considerando que el funcionamiento de la normalización en la Comunidad debe estar basado en los derechos fundamentales que ostentan los organismos nacionales de normalización, tales como la posibilidad de obtener proyectos de normas, de conocer el curso dado a los comentarios presentados, de participar en los trabajos de normalización nacionales o de solicitar la elaboración de normas europeas en lugar de normas nacionales; que corresponde a los Estados miembros tomar las medidas necesarias a su alcance para que esos organismos de normalización respeten estos derechos;
- (26) Considerando que las disposiciones relativas al *statu quo* que los organismos nacionales de normalización deben mantener cuando se esté elaborando una norma europea deben ser consonantes con las disposiciones adoptadas al respecto por los organismos de normalización en el marco de los organismos europeos de normalización;
- (27) Considerando que procede crear un Comité permanente, cuyos miembros serán designados por los Estados miembros, encargado de ayudar a la Comisión en el examen de los proyectos de normas nacionales y de cooperar con ella en sus esfuerzos para atenuar los eventuales efectos negativos de las mismas sobre la libre circulación de mercancías;
- (28) Considerando que conviene que se consulte al Comité permanente sobre los proyectos de encargo de trabajos de normalización contemplados en la presente Directiva;
- (29) Considerando que la presente Directiva se ha de aplicar sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición de las Directivas contemplados en la parte B del anexo III,
- 2) «especificación técnica»: una especificación que figura en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.
- El término «especificación técnica» abarca también los métodos y procedimientos de producción de los productos agrícolas, con arreglo al apartado 1 del artículo 38 del Tratado, de los productos destinados a la alimentación humana y animal, de los medicamentos definidos en el artículo 1 de la Directiva 65/65/CEE del Consejo ⁽¹⁾, así como los métodos y procedimientos de producción referentes a los demás productos, en caso de que incidan en las características de estos últimos;
- 3) «otro requisito»: un requisito, distinto de una especificación técnica, impuesto a un producto, en particular por motivos de protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con posterioridad a su comercialización, como sus condiciones de uso, reciclado, reutilización o eliminación, cuando dichas condiciones puedan afectar significativamente a la composición o naturaleza del producto o a su comercialización;
- 4) «norma»: una especificación técnica aprobada por un organismo reconocido de actividad normativa para aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria, y que está incluida en una de las categorías siguientes:
- norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público,
 - norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público,
 - norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público;

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- 1) «producto»: cualquier producto de fabricación industrial y cualquier producto agrícola, incluidos los productos pesqueros;

- 5) «programa de normalización»: un programa de trabajo de un organismo reconocido de actividad normativa que establezca la lista de las cuestiones que son objeto de trabajos de normalización;

⁽¹⁾ Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 25 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos (DO 22 de 9.2.1965, p. 369/65); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/39/CEE (DO L 214 de 24.8.1993, p. 22).

- 6) «proyecto de norma»: el documento que incluya el texto de las especificaciones técnicas sobre una materia determinada, para la que se haya previsto su adopción según el procedimiento de normalización nacional, tal y como resulte de los trabajos preparatorios y haya sido difundido para comentario o información pública;
- 7) «organismo europeo de normalización»: un organismo mencionado en el anexo I;
- 8) «organismo nacional de normalización»: un organismo mencionado en el anexo II;
- 9) «reglamento técnico»: las especificaciones técnicas u otros requisitos, incluidas las disposiciones administrativas que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, *de jure* o *de facto*, para la comercialización o la utilización en un Estado miembro o en gran parte del mismo, al igual que, sin perjuicio de las mencionadas en el artículo 10, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíban la fabricación, la importación, la comercialización o la utilización de un producto.

En particular, son reglamentos técnicos *de facto*:

- las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro que remiten, bien a especificaciones técnicas u otros requisitos, bien a códigos profesionales o de práctica que se refieran ellos mismos a especificaciones técnicas u otros requisitos y cuyo cumplimiento otorgue una presunción de conformidad a las prescripciones fijadas por dichas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas,
- los acuerdos voluntarios en los que las autoridades públicas son parte contratante y que, por razones de interés público, tienen por objeto el cumplimiento de las especificaciones técnicas o de otros requisitos, con exclusión de los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas,
- las especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a medidas fiscales o financieras que afectan al consumo de productos al fomentar la observancia de dichas especificaciones técnicas u otros requisitos; no se incluyen las especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a regímenes nacionales de seguridad social.

Quedan incluidos los reglamentos técnicos establecidos por autoridades designadas por los Estados miembros y que figuren en una lista que deberá fijar la Comisión antes del 1 de julio de 1995, en el contexto del Comité previsto en el artículo 5.

La modificación de dicha lista se realizará con arreglo al mismo procedimiento;

- 10) «proyecto de reglamento técnico»: el texto de una especificación técnica o de otro requisito, incluidas las disposiciones administrativas, elaborado con intención de adoptarlo o de que sea adoptado en última instancia como reglamento técnico, y que se encuentre en un nivel de preparación que permita aún la posibilidad de efectuar modificaciones sustanciales.

Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a las medidas que los Estados miembros consideren necesarias en el marco del Tratado para garantizar la protección de las personas, y en particular de los trabajadores, durante la utilización de productos, siempre que dichas medidas no afecten a los productos.

Artículo 2

1. La Comisión y los organismos de normalización mencionados en los anexos I y II serán informados de los nuevos ámbitos en relación con los cuales los organismos nacionales mencionados en el anexo II hayan decidido, mediante la inscripción en su programa de normalización, establecer una norma o modificarla, salvo si se trata de la transposición idéntica o equivalente de una norma internacional o europea.

2. La información mencionada en el apartado 1 indicará, en particular, si la norma en cuestión:

- es una transposición no equivalente de una norma internacional,
- es una nueva norma nacional, o
- constituye una modificación de una norma nacional.

La Comisión, previa consulta al Comité mencionado en el artículo 5, podrá establecer las reglas para una presentación codificada de dicha información y el esquema y los criterios según los cuales deberá presentarse esta información a fin de facilitar su evaluación.

3. La Comisión podrá solicitar que le sean remitidos los programas de normalización, en parte o íntegramente.

La Comisión tendrá dicha información a disposición de los Estados miembros, de una manera que permita la evaluación y la comparación de los diferentes programas.

4. Llegado el caso, la Comisión modificará el anexo II basándose en lo comunicado por los Estados miembros.

5. El Consejo, basándose en una propuesta de la Comisión, decidirá sobre cualesquiera modificaciones del anexo I.

Artículo 3

Los organismos de normalización mencionados en los anexos I y II, así como la Comisión, recibirán, a petición propia, todo proyecto de norma y serán informados, por el organismo de que se trate, del curso dado a los posibles comentarios que hubieran realizado en relación con dichos proyectos.

Artículo 4

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para que sus organismos de normalización:

- comuniquen la información de conformidad con las disposiciones de los artículos 2 y 3,
- hagan públicos los proyectos de normas de manera que las observaciones realizadas por las partes establecidas en otros Estados miembros también puedan ser recogidas,
- concedan a los demás organismos mencionados en el anexo II el derecho a participar de manera pasiva o activa (mediante el envío de un observador) en los trabajos previstos,
- no se opongan a que un campo de normalización de su programa de trabajo sea tratado a nivel europeo según las normas que definan los organismos europeos de normalización y no emprendan ninguna acción que pueda prejuzgar una decisión a este respecto.

2. Los Estados miembros se abstendrán, en particular, de todo acto de reconocimiento, homologación o utilización por referencia de una norma nacional adoptada en violación de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 y en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 5

Se crea un Comité permanente compuesto por representantes designados por los Estados miembros, quienes podrán ayudarse de expertos o de consejeros, y presidido por un representante de la Comisión.

El Comité establecerá su propio reglamento interno.

Artículo 6

1. El Comité se reunirá con los representantes de los organismos de normalización previstos en los anexos I y II, al menos dos veces al año.

2. La Comisión presentará al Comité un informe sobre el establecimiento y la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente Directiva y de las propuestas que tiendan a la eliminación de los obstáculos comerciales existentes o previsibles.

3. El Comité se pronunciará sobre las comunicaciones y propuestas contempladas en el apartado 2 y podrá, a este respecto, sugerir a la Comisión que, entre otras cosas:

- proponga a los organismos europeos de normalización la elaboración de una norma europea en un plazo determinado,
- procure que, en caso necesario, y con el fin de evitar los riesgos de obstáculos comerciales, los Estados miembros respectivos decidan entre sí, y en un primer momento, medidas apropiadas,
- adopte toda medida apropiada,
- identifique los ámbitos para los que es necesaria una armonización y emprenda, en su caso, los trabajos apropiados de armonización en un sector dado.

4. La Comisión deberá consultar al Comité:

- a) antes de cada modificación de las listas que figuran en los anexos I y II (apartado 1 del artículo 2);
- b) en el momento del establecimiento de las reglas para la presentación codificada de la información, del esquema y de los criterios según los cuales deberán presentarse los programas de normalización (apartado 2 del artículo 2);
- c) en el momento de la elección del sistema práctico que se ha de aplicar para el intercambio de informaciones previsto por la presente Directiva y de las eventuales modificaciones que hubieren de hacerse en el mismo;
- d) en el momento del nuevo examen del funcionamiento del sistema aplicado por la presente Directiva;
- e) sobre los encargos dirigidos a los organismos de normalización contemplados en el primer guión del apartado 3.

5. La Comisión podrá consultar al Comité sobre todo anteproyecto de reglamento técnico que haya recibido.

6. A petición de su presidente o de un Estado miembro, podrá someterse al Comité toda cuestión relativa a la aplicación de la presente Directiva.

7. Los trabajos del Comité y las informaciones que a él deban someterse serán confidenciales.

No obstante, tomando las precauciones necesarias, el Comité y las administraciones nacionales podrán consultar a personas físicas o jurídicas, incluso pertenecientes al sector privado, para recabar su opinión en calidad de expertos.

Artículo 7

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas pertinentes para garantizar que, durante la elaboración de una norma europea mencionada en el primer guión del apartado 3 del artículo 6, o con posterioridad a su aprobación, sus organismos de normalización no emprendan ninguna acción que pueda perjudicar la armonización buscada y, en particular, que no publiquen en el sector en cuestión una norma nacional nueva o revisada que no sea enteramente conforme a una norma europea existente.

2. El apartado 1 no se aplicará a los trabajos de los organismos de normalización que se emprendan a petición de las autoridades públicas, con el fin de establecer, para determinados productos, especificaciones técnicas o una norma con objeto de establecer una regla técnica para esos productos.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 8, los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda solicitud contemplada en el párrafo primero como proyecto de regla técnica e indicarán los motivos que justifiquen su establecimiento.

Artículo 8

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión todo proyecto de reglamento técnico, salvo si se trata de una simple transposición íntegra de una norma internacional o europea, en cuyo caso bastará una simple información referente a dicha norma; igualmente, los Estados miembros dirigirán a la Comisión una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de tal reglamento técnico, a menos que dichas razones se deduzcan ya del proyecto.

En su caso, y salvo cuando ya se haya remitido en combinación con una comunicación anterior, los Estados miembros comunicarán simultáneamente el texto de las disposiciones legales y reglamentarias básicas de las que se trate principal y directamente, si el conocimiento de dicho texto es necesario para apreciar el alcance del proyecto de reglamento técnico.

Los Estados miembros procederán a una nueva comunicación en las condiciones mencionadas anteriormente cuando aporten al proyecto de reglamento técnico de forma significativa modificaciones que tengan por efecto modificar el ámbito de aplicación, reducir el calendario de aplicación previsto inicialmente, añadir especificaciones o requisitos o hacer que estos últimos sean más estrictos.

Cuando, en particular, el proyecto de reglamento técnico tenga por objeto limitar la comercialización o la utilización de una sustancia, un preparado o un producto químico, por motivos de salud pública o de protección de los consumidores o del medio ambiente, los Estados miembros comunicarán asimismo, bien un resumen, o

bien los datos pertinentes relativos a la sustancia, al preparado o al producto de que se trate y los relativos a los productos de sustitución conocidos y disponibles, siempre y cuando se disponga de dicha información, así como los efectos esperados de la medida en lo que respecta a la salud pública, la protección del consumidor y el medio ambiente, con un análisis de riesgo realizado, en los casos adecuados, según los principios generales para la evaluación de riesgos de los productos químicos contemplados en el apartado 4 del artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo ⁽¹⁾ en el caso de las sustancias existentes o en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 67/548/CEE del Consejo ⁽²⁾ en el caso de las nuevas sustancias.

La Comisión pondrá inmediatamente en conocimiento de los demás Estados miembros el proyecto de reglamento técnico y todos los documentos que le hayan sido enviados; asimismo, podrá presentar dicho proyecto al Comité mencionado en el artículo 5 y, en su caso, al Comité competente en el sector de que se trate, para que emitan su dictamen.

Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas u otros requisitos contemplados en el tercer guión del párrafo segundo del punto 9 del artículo 1, las observaciones o dictámenes circunstanciados de la Comisión o de los Estados miembros sólo podrán referirse al aspecto que pudiera constituir un obstáculo para los intercambios, y no al aspecto fiscal o financiero de la medida.

2. La Comisión y los Estados miembros podrán dirigir al Estado miembro que haya anunciado un proyecto de reglamento técnico ciertas observaciones que dicho Estado miembro tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, en el momento de la posterior elaboración del reglamento técnico.

3. Los Estados miembros enviarán sin demora a la Comisión el texto definitivo de un reglamento técnico.

4. La información facilitada en virtud del presente artículo no será confidencial, a menos que lo pida explícitamente el Estado miembro autor de la notificación. Toda petición de este tipo deberá motivarse.

En tales casos, el Comité mencionado en el artículo 5 y las administraciones nacionales podrán consultar, con todas las precauciones necesarias, a personas físicas o jurídicas que podrán pertenecer al sector privado para que emitan un dictamen pericial.

⁽¹⁾ Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control de las sustancias existentes (DO L 84 de 5.4.1993, p. 1).

⁽²⁾ Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1); Directiva modificada por la Directiva 92/32/CEE (DO L 154 de 5.6.1992, p. 1).

5. Cuando un proyecto de reglamento técnico forme parte de una medida cuya comunicación, en la fase de proyecto, esté prevista por actos comunitarios, los Estados miembros podrán efectuar la comunicación mencionada en el apartado 1 con arreglo a ese otro acto, siempre que se indique formalmente que dicha comunicación vale también en virtud de la presente Directiva.

La falta de reacción de la Comisión en el marco de la presente Directiva sobre un proyecto de reglamento técnico no prejuzgará la decisión que pudiera tomarse en el marco de los demás actos comunitarios.

Artículo 9

1. Los Estados miembros aplazarán tres meses, a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, la adopción de un proyecto de reglamento técnico.

2. Los Estados miembros aplazarán:

- cuatro meses la adopción de un proyecto de reglamento técnico en forma de acuerdo voluntario en el sentido de lo dispuesto en el segundo guión del párrafo segundo del punto 9 del artículo 1, y,
- sin perjuicio de los apartados 3, 4 y 5, seis meses la adopción de cualquier otro proyecto de reglamento técnico,

a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, si la Comisión u otro Estado miembro emite, en los tres meses siguientes a esta fecha, un dictamen razonado, según el cual la medida prevista presenta aspectos que, en un momento dado, podrían crear obstáculos a la libre circulación de mercancías en el contexto del mercado interior.

El Estado miembro de que se trate informará a la Comisión acerca del curso que tenga la intención de dar a tales dictámenes razonados. La Comisión comentará esta reacción.

3. Los Estados miembros aplazarán doce meses, a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, la adopción de un proyecto de reglamento técnico si, en los tres meses que siguen a esa fecha, la Comisión anuncia su intención de proponer o de adoptar, respecto de dicha cuestión, una Directiva, un Reglamento o una Decisión con arreglo al artículo 189 del Tratado.

4. Los Estados miembros aplazarán doce meses, a partir de la fecha de la recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, la adopción de un proyecto de reglamento técnico si,

en los tres meses que siguen a esa fecha, la Comisión comunica que el proyecto de reglamento técnico se refiere a una materia cubierta por una propuesta de directiva, reglamento o decisión presentada al Consejo con arreglo al artículo 189 del Tratado.

5. Si el Consejo adoptare una posición común durante el período de *statu quo* contemplado en los apartados 3 y 4, dicho período se ampliará a dieciocho meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.

6. Las obligaciones mencionadas en los apartados 3, 4 y 5 cesarán:

- cuando la Comisión informe a los Estados miembros de que renuncia a su intención de proponer o adoptar un acto comunitario vinculante,
- cuando la Comisión informe a los Estados miembros de la retirada de su proyecto o propuesta, o
- cuando la Comisión o el Consejo adopten un acto comunitario vinculante.

7. Los apartados 1 a 5 no serán de aplicación cuando, por razones urgentes surgidas por una situación grave e imprevisible y relacionadas con la protección de la salud de las personas y los animales, la preservación de los vegetales o la seguridad, un Estado miembro deba elaborar en un plazo muy breve reglamentos técnicos para aprobarlos y ponerlos en vigor inmediatamente, sin que sea posible una consulta. El Estado miembro indicará, en la comunicación mencionada en el artículo 8, los motivos que justifiquen la urgencia de las medidas en cuestión. La Comisión se pronunciará sobre dicha comunicación a la mayor brevedad y adoptará las medidas adecuadas en caso de uso abusivo de este procedimiento. La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo.

Artículo 10

1. Los artículos 8 y 9 no se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros o a los acuerdos voluntarios en virtud de los cuales los Estados miembros:

- den cumplimiento a los actos comunitarios vinculantes que tengan por resultado la adopción de especificaciones técnicas,
- cumplan los compromisos derivados de un acuerdo internacional que tengan por resultado la adopción de especificaciones técnicas comunes en la Comunidad,
- se acojan a cláusulas de salvaguardia previstas en actos comunitarios vinculantes,

- apliquen el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 92/59/CEE del Consejo ⁽¹⁾,
 - se limiten a ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
 - se limiten a modificar, con arreglo a una petición de la Comisión, un reglamento técnico de los definidos en el punto 9 del artículo 1 de la presente Directiva, con vistas a suprimir los obstáculos a los intercambios.
2. El artículo 9 no se aplicará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros destinadas a prohibir la fabricación, en la medida en que no obstaculicen la libre circulación de productos.
3. Las apartadas 3 a 6 del artículo 9 no serán aplicables a los acuerdos voluntarios a los que hace referencia el segundo guión del párrafo segundo del punto 9 del artículo 1.
4. El artículo 9 no se aplicará a las especificaciones técnicas u otros requisitos contemplados en el tercer guión del párrafo segundo del punto 9 del artículo 1.

Artículo 11

La Comisión informará cada dos años al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre los resultados de la aplicación de la presente Directiva. Las listas de los trabajos de normalización encargados a los organismos europeos de normalización con arreglo a la presente Directiva, así como las estadísticas sobre las notificaciones recibidas, se publicarán anualmente en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 12

Cuando los Estados miembros adopten un reglamento técnico, éste incluirá una referencia a la presente Directiva o irá acompañado de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 13

1. Quedan derogadas las Directivas y Decisiones que figuran en la parte A del anexo III, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición que figuran en la parte B de anexo III.
2. Las referencias hechas a las Directivas y Decisiones derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva, y deberán leerse con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el anexo IV.

Artículo 14

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 15

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 22 de junio de 1998.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Por el Consejo

El Presidente

J. CUNNINGHAM

⁽¹⁾ Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 228 de 11.8.1992, p. 24).

*ANEXO I***ORGANISMOS EUROPEOS DE NORMALIZACIÓN**

- CEN
Comité Europeo de Normalización
 - Cenelec
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
 - ETSI
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
-

ANEXO II

ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACIÓN

1. BÉLGICA
IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2. DINAMARCA
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency
3. ALEMANIA
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
4. GRECIA
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
5. ESPAÑA
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación
6. FRANCIA
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR
7. IRLANDA
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland
8. ITALIA
UNI ⁽¹⁾
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI ⁽¹⁾
Comitato elettrotecnico italiano

⁽¹⁾ El UNI y el CEI, en cooperación con el Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni y el Ministero dell'Industria, han arribado al Concit (Comitato Nazionale di Coordinamento per le Tecnologie dell'informazione) los trabajos que se deban realizar dentro del ETSI.

9. LUXEMBURGO

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. PAÍSES BAJOS

NNI

Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. AUSTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. REINO UNIDO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINLANDIA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Eletrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15. SUECIA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

ANEXO III

PARTE A

Directivas y Decisiones derogadas

(contempladas en el artículo 13)

- Directiva 83/189/CEE del Consejo y sus modificaciones sucesivas
- Directiva 88/182/CEE del Consejo
- Decisión 90/230/CEE de la Comisión
- Decisión 92/400/CEE de la Comisión
- Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
- Decisión 96/139/CE de la Comisión

PARTE B

Lista de plazos de transposición al Derecho nacional

(contemplados en el artículo 13)

Directiva	Plazo de transposición
83/189/CEE (DO L 109 de 26.4.1983, p. 8)	31.3.1984
88/182/CEE (DO L 81 de 26.3.1988, p. 75)	1.1.1989
94/10/CE (DO L 100 de 19.4.1994, p. 30)	1.7.1995

ANEXO IV

CUADRO DE CORRESPONDENCIAS

Directiva 83/189/CEE	Presente Directiva
Artículo 1	Artículo 1
Artículo 2	Artículo 2
Artículo 3	Artículo 3
Artículo 4	Artículo 4
Artículo 5	Artículo 5
Artículo 6	Artículo 6
Artículo 7	Artículo 7
Artículo 8	Artículo 8
Artículo 9	Artículo 9
Artículo 10	Artículo 10
Artículo 11	Artículo 11
Artículo 12	Artículo 12
—	Artículo 13
—	Artículo 14
—	Artículo 15
Anexo I	Anexo I
Anexo II	Anexo II
—	Anexo III
—	Anexo IV